

**ESTRATEGIAS POLÍTICAS
Y GOBIERNO LOCAL
EN LIMA METROPOLITANA**

David Sulmont Haak

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 101

Serie: Sociología y Política 20

Esta publicación forma parte del “Proyecto de promoción de jóvenes investigadores”, auspiciado por la Fundación Ford.

© Instituto de Estudios Peruanos, IEP
Horacio Urteaga 694, Lima 11
☎ 332-6194 / 424-4856
Fax (51 1) 332-6173
E-mail: iepedit@iep.org.pe

ISSN 1022-0356 (Documento de Trabajo IEP)
ISSN 1022-0429 (Serie Sociología y Política)

Impreso en el Perú
Setiembre de 1999
300 ejemplares

Hecho el depósito legal: 15010599-3501

SULMONT HAAK, David

Estrategias políticas y gobierno local en Lima Metropolitana.-- Lima:
IEP, 1999.-- (Documento de Trabajo, 101. Serie Sociología y Política, 20)

/GOBIERNO LOCAL/ACTORES SOCIALES/PARTICIPACIÓN CIUDADANA/
DEMOCRACIA/LIMA/PERÚ/

WD/05.01.01/SP/20

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
EL CONFLICTO EN GAMARRA Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES	11
LOS MEDIADORES POLÍTICOS Y SUS ARTICULACIONES	31
REFLEXIONES FINALES	45
BIBLIOGRAFÍA	49

INTRODUCCIÓN¹

El presente documento busca presentar una serie de reflexiones en torno a las características de las estrategias, los mecanismos de mediación y de articulación política que desarrollan los actores sociales con relación a los gobiernos locales en la ciudad de Lima Metropolitana².

La base empírica para estas reflexiones son dos estudios de casos realizados entre diciembre de 1998 y junio del presente año. El primero de ellos consistió en el seguimiento de los acontecimientos que condujeron al desalojo de los vendedores informales de las calles del complejo industrial y comercial textil de Gamarra en el distrito de La Victoria en marzo de 1999. A lo largo de esa coyuntura pudimos observar los componentes de un conflicto mayor por el control y el uso del espacio urbano en este conglomerado comercial, que involucra y confronta a los diferentes actores sociales presentes en él (confeccionistas textiles, comerciantes formales e informales) y a la autoridad municipal. En esta investigación, el interés se centró en la reconstrucción de las diferentes estrategias políticas que desarrollaron los actores mencionados.

El segundo caso de estudio fue el análisis de una experiencia de participación ciudadana en el distrito de Lince, promovida por la gestión municipal de Eduardo Mostajo, alcalde por la agrupación Somos Lima (hoy Somos Perú) durante el periodo 1996-1998. La experiencia implementada por la municipalidad de Lince buscaba incentivar la participación de los vecinos e involucrarlos en la gestión municipal mediante la figura de los “pre-

1. Deseo hacer explícito mi agradecimiento al Instituto de Estudios Peruanos que me dio la oportunidad de realizar este trabajo en el marco del Proyecto de Promoción de Investigadores Jóvenes en Política financiado por la Fundación Ford. Fue de especial importancia el seminario de discusión de los avances de las investigaciones de los participantes de este proyecto que se organizó junto con otros investigadores del IEP y que contó la participación de Martín Tanaka, Carlos Vargas, Patricia Ames, Francesca Uccelli, Romeo Grompone, Carlos Iván Degregori, Julio Cotler y Cecilia Blondet, cuyos comentarios y críticas han sido sumamente valiosos. También quiero agradecer el dedicado y eficiente trabajo de Omar Molina, estudiante de sociología de la Universidad Católica del Perú, quien fue mi asistente de investigación en la etapa del trabajo de campo.
2. El material y las ideas que iré presentando a lo largo del texto forman parte de un proyecto de investigación personal de mayor envergadura sobre el tema de la ciudadanía y las estrategias políticas en la sociedad peruana, el cual vengo trabajando hace algunos años y que está destinado a la preparación de mi tesis de doctorado en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

sidentes vecinales”, quienes, según palabras de las propias autoridades, debían ser los “ojos y oídos de la municipalidad”, es decir, identificar los problemas y demandas de sus vecindarios, transmitirlos al municipio y participar en la resolución de los problemas planteados. En este caso, uno de los objetivos de la investigación fue el de caracterizar el tipo de personas que participaron en este programa, así como las diferentes formas y estrategias de articulación con movimientos políticos de distintos niveles (distrital, metropolitano y nacional).

Mi intención a lo largo del texto no es dar cuenta de la problemática de la política municipal en la ciudad de Lima, en tal sentido mis reflexiones no son estrictamente sobre los gobiernos locales. La referencia a ellos tiene que ver con su presencia en los contextos analizados, en donde efectivamente, el municipio es uno de los referentes de las estrategias políticas de los actores analizados.

De lo que se trata es más bien analizar cómo se construyen “sistemas de acción concretos”, retomando una terminología desarrollada por Crozier y Friedberg en sus análisis sobre sociología de las organizaciones³. Estos sistemas consisten en:

“(...) estructuras de acción colectiva mediante las cuales se «organizan» los espacios de acción, es decir, se construyen y perpetúan los órdenes locales gracias a los cuales los actores logran estabilizar, al menos provisionalmente, sus negociaciones y sus interacciones estratégicas.”⁴

Siguiendo a Friedberg, la construcción de estos sistemas de acción concreto puede entenderse como procesos de negociación y de poder entre los actores que construyen sus reglas de juego y que logran llegar a diversos niveles de estabilización. De esta forma se configuran ordenes locales contingentes, inestables y arbitrarios puesto que son siempre fruto de una negociación política acerca de las reglas de interacción entre actores cuyo poder es casi siempre asimétrico. El orden logrado puede entonces ser puesto en cuestión cuando aparecen nuevos elementos (oportunidades, capacidades, recursos) que cambian las correlaciones de fuerza y provocan nuevos arreglos.

Es interesante mencionar algunos de los supuestos de esta perspectiva de análisis, la cual, más que una teoría social, constituye, como lo manifiestan sus autores, una herramienta heurística para comprender la acción social en contextos delimitados.

3. Ver: Michel Crozier y Erhard Friedberg, *L'acteur et le Systeme: Les contraintes de l'action collective*, Seuil, Paris, 1977. Ver también: Erhard Friedberg, *Le Pouvoir et la Règle: Dynamiques de l'action organisée*, Seuil, Paris, 1993.
4. Erhard Friedberg, *Le Pouvoir...*, Op. Cit., pg. 109, traducción propia.

En la medida que un individuo o un grupo necesita una serie de recursos de su medio para poder realizar sus objetivos se ve obligado a interactuar con él. Este medio está compuesto también por otros actores que tienen sus propios objetivos y que son a la vez demandantes y fuente de recursos para los objetivos de los demás. En tal sentido se configura un espacio de acción donde existe una interdependencia entre los actores, pero donde hay siempre un cierto nivel de incertidumbre, puesto que ninguno de ellos tiene un control absoluto de las acciones de los demás. Las estrategias que desarrollan los actores buscan controlar esa incertidumbre construyendo una serie de mecanismos que regulan sus interacciones. Para ello establecen una serie de acuerdos y negociaciones entre sí.

El orden resultante es negociado y por lo tanto es construido a partir de una racionalidad política, diferente a la puramente instrumental, ya que el cálculo racional de medios y fines se ve interferido por el hecho que no son posibles ni una información totalmente transparente sobre el contexto donde se desenvuelve la acción, ni un control absoluto de los medios necesarios para las estrategias propias⁵, puesto que en estos casos, los medios son justamente otros actores con fines diferentes⁶.

El poder, desde este enfoque, es la capacidad que tienen los actores de estructurar los procesos de intercambio más o menos durables (construir un orden) en su favor y depende tanto de las posibilidades de acción que cada uno de los participantes en la interacción puede ofrecer para las estrategias de los demás, como de la autonomía que ellos tienen en estas transacciones, lo que determina lo previsible o imprevisible de su comportamiento para los demás⁷. En ese sentido, en una interacción ninguno de los actores carece de poder, lo que sucede es que éste es asimétrico. De allí que el ejercicio del poder supone una relación social mutuamente vinculante, que constriñe a todos los participantes pero que posibilita la acción al mismo tiempo. Es un proceso de negociación y no de imposición pura y simple de uno sobre otro, se trata de un juego de correlaciones de fuerza para construir un orden local, que puede cambiar. El trabajo del investigador es analizar los procesos mediante los cuales estos órdenes se construyen en cada contexto determinado y cómo logran llegar a un determinado nivel de estabilización, que puede traducirse en una formalización o institucionalización algo más durable de los mecanismos de negociación.

5. Esto es descrito como un “déficit de racionalidad” que no es posible suplir completamente en la acción organizada. Ibid, pg. 108.
6. Más aún, los actores llegan a ser “prisioneros de los medios que han escogido para regular su cooperación y que circunscriben incluso sus capacidades para definir nuevos fines”. Crozier y Friedberg, *L'acteur...*, Op. Cit. Pg. 20, traducción propia.
7. A mayor autonomía, más imprevisible puede ser el comportamiento de un actor y por lo tanto tiene mayor poder, aunque ello tiene ciertos límites, puesto que el comportamiento totalmente imprevisible de un actor puede conducir a que los demás consideren demasiado arriesgado relacionarse con él, lo que tiene como consecuencia una no - relación, en la cual el poder es inútil ya que no existe un campo donde pueda ejercerse.

Si bien es necesario recalcar que los procesos de institucionalización son siempre contingentes, un cierto nivel de estabilidad es indispensable para la continuidad de las interacciones ya que permite a todos controlar la incertidumbre, aunque los beneficios de ello se distribuyan desigualmente:

“El lugar de los elementos formalizados es siempre esencial en la medida que permite instituir una legitimidad, fijar jerarquías, órdenes de precedencia, asignar derechos de acceso y atribuciones y estructurar una relación de fuerza, en resumen, permite proteger a los actores de un campo al «ponerle cerrojo» contra los cuestionamientos del orden demasiado brutales”⁸

Los sistemas de acción concretos sobre los cuales pretendo hablar, tienen que ver con los mecanismos que posibilitan la acción política y las características de ésta última en determinados contextos de nuestra sociedad. Por ello me interesa describir las estrategias políticas de los actores, las reglas son creadas y utilizadas para resolver conflictos entre intereses sociales en un espacio público, así como los intermediarios que intervienen en estos procesos y sus formas de articulación.

Un problema que quisiera discutir a lo largo del texto es el tipo de reglas y la naturaleza de la estructuración de los diferentes órdenes locales que se van configurando y sus implicancias en la forma como se construyen las estrategias políticas. En un texto donde discutía el concepto de anomia en el Perú, Catalina Romero⁹ proponía concebir a nuestra sociedad como fruto de arreglos entre diversos órdenes heterogéneos que dan como resultado una unidad compleja y conflictiva, con niveles importantes de incertidumbre.

Teniendo en mente la dificultad de moverse entre esos órdenes heterogéneos y conflictivos, escribí un artículo sobre la ciudadanía en el Perú¹⁰ en el que planteaba que la participación en la política en nuestro país implica confrontarse a mecanismos que permiten y a la vez obstaculizan el acceso de las personas a la esfera pública, por lo tanto, las estrategias de las personas debían moverse en ámbitos estructurados por lógicas diferentes y aparentemente contrapuestas. Por ejemplo, para reclamar el acceso a los servicios básicos en los asentamientos humanos, sus habitantes hacen uso de sus derechos “ciudadanos” en el sentido “clásico”, tales como la libertad de expresión, de organización, de marchar o protestar, a la vez que se insertan en redes clientelistas, buscan ganarse el favor de ciertos funcionarios mediante coimas o regalos, etc. Esto puede interpretarse como un juego entre reglas formales e informales de relación política.

8. Erhard Friedberg, *Le Pouvoir...*, Op. Cit., Pg. 153, traducción propia.

9. Catalina Romero, “Violencia y anomia: comentarios sobre una reflexión”, en: *Socialismo y Participación*, No. 39, Lima, 1987.

10. David Sulmont, “Ciudadanos por dentro y por fuera”, en: *Cuestión de Estado*, No. 20, IDS, Lima, Abril de 1997.

Sin embargo no se trata de una simple oposición entre el “país formal” y el “país real” u otras dicotomías análogas como “moderno / tradicional”, “ordenado / desordenado” sino de una especie de complementariedad entre situaciones que pueden describirse en esos términos. La utilización de estas categorías da cuenta más bien de lo conflictivo e inestable que pueden ser los arreglos entre los diversos ordenes entre los cuales discurren las trayectorias de los actores sociales y políticos.

Pienso que las estrategias que se construyen sobre la base de estas lógicas diversas son más bien formas de gestión de los mecanismos de integración y de exclusiones sociales, característicos de las sociedades latinoamericanas en general, y de la peruana en particular.

Al respecto Alain Touraine sostiene que:

“La oposición de los ciudadanos y de los excluidos es central no sólo porque la sociedad latinoamericana está hecha de su interdependencia y amalgama tanto como de su separación. El sistema social y político latinoamericano aspira y rechaza al mismo tiempo, separa y amalgama a la vez, de suerte que todos los actores sociales participan, pero sólo parcial y débilmente, en la transformación social por ella misma”.¹¹

Haciendo una reflexión sobre la exclusión social y desigualdad en el Perú, Figueroa y otros¹² plantean argumentos similares al proponer que la democracia capitalista en las sociedades latinoamericanas genera a la vez integración, desigualdad y exclusiones sociales. Se trata de un proceso dinámico, ya que con el transcurso del tiempo, la acción de las instituciones públicas y los movimientos sociales tienden a la igualación de los activos políticos y culturales de los miembros de la sociedad, al mismo tiempo que los mecanismos del mercado se orientan hacia la concentración de activos económicos que son fuente de importantes desigualdades sociales y exclusión¹³.

En el mismo texto, se señala que la participación en redes sociales es un componente central en los procesos de integración y exclusión social. Dos niveles de redes interconectados entran en juego, por un lado las redes universales y ciudadanas, producto de la intervención de las instituciones públicas y los procesos democratizadores, mientras que por el otro un conjunto de redes particulares jerarquizadas que permiten o bloquean el acceso a las redes más universales, a la vez que reproducen la desigualdad o protegen de ella a los actores más vulnerables:

11. Alain Touraine, *América Latina Política y Sociedad*, Espasa Calpe, Madrid, 1989, Pg. 287.

12. Adolfo Figueroa, Teófilo Altamirano y Denis Sulmont, *Exclusión social y desigualdad en el Perú*, OIT-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 1996.

13. Ibid. , Pg. 132.

“ (...) la pertenencia a redes particulares jerarquizadas, donde las altas redes sociales brindan y requieren a la vez de activos sociales elevados, acentúa la desigualdad. Este es un mecanismo de acumulación de ventajas para las elites. Pero, ser miembro de otras redes sociales puede operar como un mecanismo de protección social para los excluidos. Las redes sociales desempeñan por lo tanto un papel muy importante tanto en la generación como en la reducción de la desigualdad social”.¹⁴

La idea de jerarquización nos devuelve al tema del poder y su capacidad de construir órdenes asimétricos, así como nos remite a los conflictos por el control de los mecanismos de mediación política y de acción estatal. No se trata sólo de un poder derivado del control de recursos económicos, sino también de la disposición de activos culturales y políticos. Como es lógico, las diferencias sociales condicionan el abanico y el tipo de recursos que los actores pueden movilizar en sus estrategias políticas.

Otro de los problemas que quiero abordar en el texto es la dificultad que representa un contexto social marcado por la combinación de procesos complementarios de exclusión e integración para generar en la esfera política peruana mecanismos que institucionalicen los acuerdos que se puedan construir. Esto tiene importantes consecuencias en la naturaleza de la esfera política y el tipo de articulaciones que puedan construirse entre los actores que allí se desenvuelven.

Para desarrollar estas reflexiones he organizado mi texto en tres partes, a lo largo de las cuales se irán presentando los casos que he seguido en la investigación. La primera parte trata sobre el proceso que condujo al desalojo de los vendedores ambulantes de Gamarra, en la cual describiré e intentaré caracterizar las diferentes estrategias políticas que implementaron los actores involucrados en esta problemática. En la segunda parte, desarrollaré una reflexión acerca de las características de los mediadores políticos que aparecen en la construcción de estrategias políticas, en especial respecto de los gobiernos locales, para lo cual haré uso de la información recogida tanto en La Victoria como en Lince, asimismo discutiré los diferentes mecanismos de articulación que se construyen entre estos mediadores políticos. Finalmente, en la última parte presentaré algunas reflexiones finales.

14. Ibid., Pg. 51.

EL CONFLICTO EN GAMARRA Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES

Como hemos mencionado, en el conglomerado industrial y comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria nos interesaba estudiar el conflicto entre los diferentes actores presentes en torno al uso y control del espacio urbano, conflicto que tiene como uno de sus escenarios las instituciones de gobierno local. Gamarra como es bien conocido, es uno de los conglomerados comerciales e industriales más dinámico e importante del país. Según estimaciones recientemente vertidas en medios de comunicación, tiene un movimiento comercial que bordearía los 800 millones de dólares anuales, y sería fuente de trabajo directo o indirecto para más de 100,000 personas. Más allá de la exactitud o no de las cifras¹⁵, su magnitud, subestimada o exagerada, nos dan una idea de la importancia del fenómeno social “Gamarra” en el contexto peruano¹⁶.

Según cifras del INEI, La Victoria es, después del Cercado, el segundo distrito de Lima Metropolitana cuanto número de establecimientos económicos, allí se ubican el 9.4% del total de establecimientos dedicados a alguna actividad comercial en la capital¹⁷. Es un distrito particularmente dinámico en lo referente a la actividad textil, casi el 47% de los establecimientos de Lima Metropolitana dedicados a esta rama económica se encuentran en La Victoria, la mayoría ubicados en la zona de Gamarra¹⁸. Por otro lado, de los 378 centros y galerías comerciales existentes en nuestra capital 88 (el 23%)¹⁹ están en La Victoria y de ellos casi la totalidad en Gamarra²⁰.

De acuerdo con la misma fuente²¹, la inversión en galerías comerciales en este complejo asciende aproximadamente a 70 millones de dólares, de un total de inversión privada en la zona cercano a los 130 millones de dólares. Si esto es cierto, nos encontramos frente a una de las inversiones privadas de capitales nacionales más importantes de los últimos 20 años.

Es el uso de las calles de Gamarra lo que ha motivado uno de los principales conflictos entre los actores de la zona, en especial entre los comerciantes de prendas de vestir y de insumos formales e informales (los que tienen locales y los que venden en la calle). Todas las calles aledañas al Jr. Ga-

15. Uno de los mayores problemas que enfrenta cualquier investigador que se interese por un tema en la zona es la ausencia total de estadísticas confiables de la zona de Gamarra. Ello es producto de la propia dinámica que ha dado origen a este fenómeno social.

16. Para una reseña más exhaustiva acerca de la historia y características de Gamarra ver el libro de Carlos Ramón Ponce, *Gamarra: Formación, estructura y perspectivas*. Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1994.

17. Cifras del III Censo Económico de 1994.

18. Ibid.

19. INEI, *La actividad económica en Lima Metropolitana*, INEI, 1997.

20. Según la revista *Gamarra*, en esta zona había 87 galerías y centros comerciales en 1998. Ver: *Revista Gamarra*, No. 52, Febrero de 1998.

21. *Revista Gamarra*, No. 58, Agosto de 1998.

marra, especialmente entre las cuadras 5 y 9, habían sido ocupadas por comerciantes informales que competían con quienes tienen locales.

Existe una importante diferencia entre dos grupos de comerciantes informales que se han ubicado en los alrededores de la zona de Gamarra. Un primer grupo, que ya se ha mencionado, está compuesto por los vendedores de prendas e insumos directamente ligados a la dinámica del conglomerado textil. El segundo grupo está más bien relacionado con la dinámica comercial de La Parada, sus puestos se ubican a los alrededores de los mercados mayoristas y lo largo de la Av. Aviación (cuadras 3 a 7), en donde puede encontrarse una oferta de productos y servicios mucho más variada: abarrotes, telas, ropa, música (cassettes piratas), electrodomésticos, verduras, artículos de magia y curanderismo (hierbas, amuletos, implementos para “mesas” de curanderos), muebles, talleres de reparación de electrodomésticos, carpintería metálica, ferreterías, etc. Como convención me referiré al primer grupo como los informales de Gamarra y al segundo como los de La Parada, distinción que cobrará importancia más adelante en el texto.

La ocupación de la vía pública se ha producido durante el auge de Gamarra en los últimos 10 años. Resulta difícil cuantificar la extensión de este fenómeno, según estimaciones de la municipalidad y de asociaciones tanto de empresarios formales como informales habrían existido entre 2,500 y 3,500 comerciantes ambulantes instalados en la zona de Gamarra²². Como es sabido, la instalación permanente de los ambulantes en la calle se produce de manera paulatina. Primero son verdaderos “ambulantes”, personas que cargan la ropa en ganchos y deambulan por las pistas ofreciendo sus productos. Conforme transcurre el tiempo la instalación se va haciendo más permanente, se lotiza la calle, se levantan toldos, se llegan incluso a construir kioscos de madera o de concreto sin autorización municipal²³. Poco a poco llega a desarrollarse también un mercado de venta o de traspaso de puestos en la vereda y en la pista. En la etapa de consolidación de la ocupación de la vía pública juegan un rol central las organizaciones de ambulantes y las negociaciones con la autoridad municipal.

Las estrategias para ocupar las calles han sido múltiples. Los primeros ambulantes que llegaron a la zona de Gamarra eran personas, en su mayoría inmigrantes, vinculadas al movimiento de La Parada que simplemente ocuparon la calle e instalaron sus puestos. En muchos casos esto ha sido un proceso familiar: una familia extensa que pone puestos en diferentes lugares. También hay casos de grupos de paisanos o vecinos de un mismo asentamiento humano que se instalan en la calle.

22. Tampoco queda claro si estas estimaciones incluyen a los informales ubicados en la Av. Aviación y los alrededores de La Parada, que como dije forman parte de otra dinámica. Me atrevo a pensar que no.

23. La revista Gamarra reportó en julio de 1996 la existencia de 199 kioscos en la zona.

Otras formas son más organizadas: grupos de ambulantes que deciden “invadir” la calle como quien hace una invasión para formar un pueblo joven, poniendo banderas peruanas en sus puestos invadidos como símbolo de legitimidad. Al inicio, los ambulantes enfrentan la fuerte oposición de los dueños o locatarios de las galerías, ya que se instalan en la puerta de estos locales. También se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados de por la autoridad municipal. En estos momentos iniciales de “invasión” de la calle hay que resistirse y “aguantar” las presiones de los comerciantes formales y de la municipalidad. Pasado este primer momento de “obstinación”, frente al hecho consumado, y la falta de autoridad de las instituciones de gobierno local para desalojar a los informales, viene una etapa de negociación. Con los comerciantes formales se negocia el dejar libre el acceso a las tiendas o a las galerías. Frente a la municipalidad, primero se opta por corromper, mediante las famosas “bolsas”, a los funcionarios municipales de menor nivel, en especial los policías municipales que aceptan sin demasiados problemas un ingreso extra debido a los bajos sueldos que perciben. Luego, se trata más directamente con la autoridad mayor (el alcalde o el director de comercialización) y se establecen ciertas reglas elementales, algunas de las cuales se convierten en ordenanzas municipales: un determinado espacio por puesto (por ejemplo 4 m²) y el pago del derecho de Ocupación de la Vía Pública, especie de tributo “formalizado” por la municipalidad.

Augusto Allca, vendedor informal de la cuadra 8 del Jr. Gamarra y presidente de una asociación de informales nos relata un poco este proceso:

13

“La asociación se fundó el 8 de enero de 1994 y agrupa a los ambulantes de la cuadra 8 del Jr. Gamarra. Antes, en el 93, nosotros trabajábamos en forma ambulatoria (*a diferencia de tener un puesto fijo en la calle*). Nos reunimos un grupo de personas para invadir esta cuadra y poder vender. Realizamos la invasión el 8 de enero de 1994, de ahí el nombre de la asociación, y lotizamos la calle. Tuvimos serios problemas con el municipio y sobre todo los dueños de las galerías que nos querían botar. Luchamos con ellos para poder permanecer, la gente de las galerías nos hacía la vida imposible para sacarnos de acá. Por ejemplo en Navidad del 94 nos echaban agua con caca desde las galerías y nos ensuciaban toda la mercadería.”

Es interesante anotar que varios los miembros de la asociación a la que se refiere Allca son sus propios vecinos de Huaycán en el distrito de Ate Vitarte.

Los primeros ocupantes de la vía pública estaban en una posición privilegiada para posteriormente hacer negocio con la “lotización” de la calle. Es conocido en la zona el mercado de puestos callejeros que existía, incluso se hablaba de alquileres de 10 soles diarios por “lote” cobrados por estos “pioneros”, que además podían tener su propia red de puestos controlados por familiares. En movimientos de traspaso o venta de ubicaciones, el monto de las transacciones podía superar en algunos casos los 500 dólares por “puesto”. En ciertas cuerdas se recurría a matones contratados entre los ha-

bitantes de los alrededores de La Parada (en especial de los cerros San Cosme, El Pino y El Agustino) para efectuar estos cobros, que podían incluir un servicio de “seguridad” brindado ellos mismos²⁴.

Después de varios años de falta de autoridad en Gamarra, el desorden y el hacinamiento de puestos ambulantes en las calles parecía haberse instalado definitivamente, acompañado de robos y asaltos (no olvidemos que La Parada, conocida el todo Lima por sus altos índices de delincuencia, se encuentra a media cuadra del conglomerado), lo que en definitiva era nocivo para los negocios y para cualquier proyecto de inversión en la zona.

Otro de los actores presentes en el conflicto por el uso del espacio urbano en Gamarra son los dueños de tiendas y galerías, quienes tienen particular interés en el desarrollo comercial e inmobiliario de la zona. Para ellos los ambulantes representaban y eran los principales culpables del caos reinante en el lugar. Para que Gamarra se desarrolle en sus términos, lo que había que hacer era erradicar a los ambulantes.

En Gamarra, podemos encontrar (y de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos) varios personajes representativos de este sector que comparten características y trayectorias similares: inmigrantes que, en algunos casos partiendo de la actividad informal, poco a poco acumularon capital y lo fueron invirtiendo en bienes inmobiliarios en la zona. Ellos han sido citados en innumerables ocasiones y desde diversas perspectivas como ejemplo de personas que, partiendo de una condición modesta, han logrado gracias a su esfuerzo y sacrificio el éxito empresarial en nuestro país, contribuyendo a crear una especie de “mitología” de Gamarra y la pequeña y mediana empresa. Entre estos iconos figuran Vicente Díaz Arce (cuya historia ha sido contada en forma de biografía novelada por José María Salcedo²⁵), los hermanos Pedro y Nemesio Guizado y el vicepresidente de la República Ricardo Márquez. También hay otros menos conocidos, comerciantes de insumos y telas de diversos orígenes: provincianos, limeños, de ascendencia árabe o asiática, etc. El común denominador es que se trata de los dueños de algunas de las galerías, talleres industriales o importadoras y comercializadoras de insumos y maquinarias más importantes de la zona. Alrededor de este núcleo principal se aglutinan otros comerciantes o confeccionistas medianos que son a su vez propietarios de sus locales, lo que en Gamarra, constituye una inversión y un capital inmobiliario de gran importancia.

Se trata de personas que tienen intereses económicos muy concretos en la zona. No sólo ejercen su actividad ahí, sino que son propietarios de locales que están entre los más caros del Perú. Son quienes apoyan con mayor

24. Era común ver en el Jr. Gamarra en particular, “vigilantes” armados con varillas de hierro y un pito rondando los puestos de los ambulantes.

25. Ver: José María Salcedo, *El Jefe: de ambulante a magnate*, FIMART, Lima, 1993.

énfasis el ordenamiento y el desarrollo de la infraestructura urbana y de servicios de Gamarra, para convertirla en un mercado atractivo para la clientela capitalina, ordenamiento que implica la erradicación del comercio ambulatorio que es visto por ellos mismos como su principal competencia.

Juan Infante, director de la revista Gamarra y presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, que representa a un grupo importante de estos empresarios gamarrinos, escribía, en febrero de 1999, una carta abierta al alcalde de La Victoria, Jorge Bonifaz manifestándole su respaldo a las medidas de reordenamiento del comercio ambulatorio emprendidas por la municipalidad, en donde además mencionaba lo siguiente:

“(…) los 14 mil empresarios formales de Gamarra vivimos ahogados por 2,500 ambulantes que compiten deslealmente, impiden el flujo del tránsito vehicular, aumentan la basura, la inseguridad y el desorden, desalientan la inversión y generan un ambiente hostil para los compradores. Además de ello, ponen en serio riesgo la vida de las 60 mil personas que laboramos en la zona de Gamarra dado que impiden la llegada fluida de los bomberos, la policía o las ambulancias en caso de alguna emergencia.

Somos 14 mil empresas y 60 mil trabajadores los que vivimos este problema, hasta ahora ningún alcalde ha sabido responder a la altura de este reto, sin embargo, usted y la trayectoria de Somos Perú en este tema, nos ofrecen una garantía de solución.”²⁶

Algunos de ellos marcan su distancia con respecto a otros grupos, por ejemplo comerciantes o confeccionistas que alquilan locales, aduciendo su condición de propietarios. Uno de estos empresarios nos comentaba en una conversación sobre los problemas de Gamarra:

“¿A quién debe interesarle lo que pasa en Gamarra?, ¿quiénes son los principales interesados?, para decir algo, para tener derecho a decir algo, hay que tener propiedad, ser propietario. ¿Los confeccionistas?, ellos son inquilinos, son aves de paso, los que nos quedamos y dependemos de lo que pasa acá, somos quienes tenemos una propiedad.”

No estoy considerando a otros grupos sumamente importantes que constituyen la gran mayoría de las personas que desarrollan alguna actividad económica o que trabajan en Gamarra, que son los pequeños confeccionistas y sus asociaciones, así como la gran cantidad de trabajadores (especialmente trabajadoras) que laboran en los talleres y tiendas. Su rol en cierta medida marginal en la coyuntura que pretendo analizar me permite hacer esta grave omisión. Para mayores referencias al respecto recomen-

26. *Revista Gamarra*, No. 63, Febrero de 1999.

mos revisar el trabajo de Carlos Ramón Ponce sobre los orígenes y características de Gamarra.²⁷

Como rasgo general, hay que anotar que la mayoría de personas que desarrollan su actividad en esta zona son inmigrantes de provincias, muchos de los cuales empezaron como empleados u obreros de alguna empresa, pasaron a ser informales y dependiendo de su éxito lograron formar o insertarse en una actividad más formal. Es importante también mencionar la existencia de una segunda generación de “Gamarrinos”, que nacieron “en el mundo de los trapos y las telas”, hijos de los “pioneros” que se iniciaron a partir de la dinámica de la parada y “fundaron” Gamarra (como los hermanos Guizado o Vicente Díaz Arce). Esta segunda generación ha seguido los pasos de sus padres, dedicándose al comercio o confección de textiles en Gamarra.

Finalmente, el siguiente actor involucrado en la coyuntura que nos interesa es la municipalidad de La Victoria. He mencionado ya la gran importancia económica de este distrito en el contexto de Lima, que a su vez tiene correlato en la recaudación tributaria municipal. Según datos publicados por el diario Expreso²⁸ en 1994, La Victoria era el quinto distrito con la recaudación tributaria más importante, después de distritos característicos de clase media o media alta como San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco

16

Sin embargo, desde hace varios años, la administración municipal de La Victoria ha sido identificada como una de las más corruptas de la capital. En noviembre de 1995, dos meses antes de la transferencia de los gobiernos municipales a las autoridades electas ese año, la Contraloría General de la República difundió en algunos medios de comunicación²⁹ los resultados de una investigación sobre defraudaciones y otros delitos de malversación de fondos y sobornos en varios concejos distritales de Lima Metropolitana. A la cabeza de la lista, figuraba el municipio de La Victoria, con más de 9 millones y medio de soles defraudados a los contribuyentes, eso representa aproximadamente el 37% de lo recaudado por ese distrito en 1994.

Varias de las personas vinculadas con diversas gestiones municipales que entrevisté en el trabajo de campo han denunciado la presencia de mafias enquistadas en el municipio que negociaban principalmente con las licencias municipales y controlaban una red de allegados al interior de los funcionarios municipales que llegaban a manipular hasta al propio alcalde y los directores municipales, haciendo prácticamente imposible que el municipio pudiera tener algún tipo de acción eficaz en el distrito:

27. Carlos Ramón Ponce, *Gamarra...*, Op. Cit.

28. Ver *Expreso*, 5/10/94

29. Ver: Diario *Expreso*, 24/11/95.

La corrupción y la desorganización al interior del municipio llegaron a límites extremos con la última administración municipal del Sr. Juan Olazábal entre 1996 y 1998, calificada unánimemente por todos los vecinos victorianos y en especial los empresarios de Gamarra como una de las más desastrosas de los últimos años. Cuando la nueva administración de Somos Perú, conducida por Jorge Bonifaz, asumió el gobierno local, se encontraron con un municipio sin ningún tipo de registro de contribuyentes ni de licencias comerciales, tampoco existían planos catastrales del distrito. Estos registros que son la base de la continuidad administrativa de toda institución pública no existían ya que la gestión anterior había contratado “servicios” privados para que se encarguen de estas tareas.

No es nuestra intención profundizar más en el caos administrativo del municipio de la Victoria, que es bastante común en otros gobiernos locales del país. Nos interesa simplemente dejar constancia de él para poner en perspectiva las acciones posteriores del municipio, en particular en lo concerniente a Gamarra, ya que ello muestra un proceso de acercamientos y de presión de los intereses económicos de los empresarios gamarrinos respecto del gobierno local.

La nueva gestión de Somos Perú iniciada en enero de 1999 ha significado un cambio importante en la relación del municipio con el complejo de Gamarra. Un mes antes de asumir su cargo, el nuevo alcalde Jorge Bonifaz anuncia su voluntad de erradicar a los comerciantes informales de Gamarra como una de las primeras medidas de su gestión. Este anuncio pone en movimiento a las organizaciones de informales que comienzan a desarrollar estrategias para enfrentar esa amenaza.

Las organizaciones de comerciantes ambulantes juegan un rol central en el proceso de consolidación de su permanencia en las calles. En un trabajo sobre el comercio ambulatorio en Lima, desde una perspectiva jurídica, Enrique Guersi³⁰ desarrolla una reflexión sobre la normatividad que rige en el comercio ambulatorio limeño.

De acuerdo con este texto, entre los vendedores ambulantes se crea un tipo de normatividad extra-legal, basada en mecanismos de derecho consuetudinario, que legitima la posesión y permanencia de un espacio en la vía pública para desarrollar su actividad, es lo que él llama “el derecho especial de dominio”. Este tipo de “derecho” es un fenómeno que se desarrolla entre los vendedores ambulantes que dejan de ser ambulantes, para instalarse con cierta estabilidad en un espacio determinado, pero sin dejar la informalidad³¹.

30. Enrique Guersi, “Normatividad extra-legal en el comercio ambulatorio”, en Enrique Guersi (ed.), *El comercio ambulatorio en Lima Metropolitana*, Instituto Libertad y Democracia, Lima, 1989.

31. Enfocar el tema de la informalidad desde una perspectiva jurídica, donde además intervienen análisis de racionalidades económicas de costo-beneficio desde una óptica de la teoría

Los factores que permiten la consolidación de derechos especiales de dominio sobre ciertas áreas de la vía pública tienen que ver con la presencia física de los comerciantes informales en un determinado lugar, el transcurso del tiempo, las organizaciones de ambulantes y su capacidad de negociación, así como con la reacción de las autoridades, fundamentalmente locales.

Según Guersi, si bien la invasión de las calles es al principio un hecho individual y espontáneo, una vez instalados los ambulantes en un lugar surge la necesidad de generar acuerdos para asegurar la autodefensa y la permanencia de los puestos en el lugar. Hemos visto, sin embargo, que no siempre se trata de un hecho individual, en muchos casos se trata de estrategias familiares y comunitarias que permiten la ocupación de un lugar, mediante invasiones organizadas, y la permanencia en el mismo, a través de la rotación de miembros de la familia nuclear o extensa en el puesto. Esta estrategia colectiva puede dar lugar a que miembros de un mismo grupo familiar (y en algunos casos de una misma comunidad) logren ocupar varios puestos en la calle. Páginas más arriba, reseñé la experiencia de los comerciantes informales de la cuadra 8 del Jr. Gamarra, relatada por su dirigente Augusto Allca.

La generación de acuerdos entre los informales da lugar a la creación de organizaciones que permitan resolver conflictos de posesión de las calles entre sus miembros, protegerse de la invasión de otros ambulantes ajenos a la organización en la zona ocupada y negociar con las autoridades compromisos que garanticen la permanencia de los puestos en la calle. Para Guersi, la organización y la permanencia de los ambulantes en un puesto permite asegurar la consolidación de los “derechos especiales de dominio”. El proceso de asociación sería posterior al momento en el cual la ocupación ha valorizado una ubicación, y forma parte de un acto racional, en base al cálculo de costos y beneficios, que permitiría proteger una inversión económica.

económica neoclásica, ha sido motivo de un debate importante en las ciencias sociales latinoamericanas. Esta perspectiva ha sido expuesta en varios trabajos, uno de los más importantes es “El Otro Sendero” de Hernando de Soto, cuyo Instituto Libertad y Democracia a promovido reflexiones similares como la del libro del cual Guersi es editor. Estos trabajos tienen en común identificar las causas de la informalidad con las barreras institucionales, fundamentalmente del Estado, que impiden el funcionamiento adecuado de los mecanismos del mercado, que son conocidos y utilizados eficientemente por los “empresarios” informales. Una de las críticas más importantes de este enfoque han sido expuestas en un estudio acerca del sector informal urbano en Lima Metropolitana, auspiciado por el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) y conducido por Daniel Carbonetto, Jenny Hoyle y Mario Tueros (*Lima: Sector Informal*, CEDEP, Lima, 1998), que relacionan el fenómeno de la informalidad con la heterogeneidad estructural de las economías y sociedades latinoamericanas y no con un problema de normatividad jurídico-administrativa obstructora de las iniciativas empresariales. No es nuestra intención entrar en este debate. A pesar de sus críticas, el enfoque que intelectuales como Guersi proponen nos parece interesante para entender las estrategias sociales y políticas de los comerciantes ambulantes en el contexto que pretendemos analizar.

Sin embargo, es preciso anotar que otros elementos, más allá de racionalidades económicas, intervienen en la consolidación de los derechos especiales de dominio y de organizaciones que los garanticen. Se trata de relaciones de confianza interpersonal, basadas sea en vínculos de parentesco o comunitarios (entre paisanos o vecinos). Frente a la ausencia de mecanismos institucionales que puedan generar sanciones frente al incumplimiento de acuerdos o contratos, los pactos “informales” necesitan de algún nivel de confianza, y por lo tanto de conocimiento cercano entre las personas, que puedan sustentarlos. Esta confianza interpersonal, que sustenta a las organizaciones, permite además generar una reputación al interior de un grupo reducido de informales, lo que resulta clave para el funcionamiento de mecanismos como el crédito informal³².

Cuando hay conflictos entre los informales o se necesita garantizar el cumplimiento de los acuerdos, uno de los pocos mecanismos con los que cuentan estos actores es la presión del grupo. En este sentido se crean diferentes instancias para la resolución de desacuerdos, en primer lugar está el rol de los dirigentes y cuando su mediación no funciona se recurre a las asambleas.

La presión del grupo como mecanismo de resolución de conflictos puede manifestarse mediante el cuestionamiento de la buena reputación de quien se aparta de las decisiones comunes (que afecta, por ejemplo la credibilidad ante los potenciales prestamistas de dinero), o bien mediante el hostigamiento. Por ejemplo, en un comunicado aparecido a principios de enero de 1999, firmado por diferentes asociaciones de ambulantes de Gamarra, se anunciaron las primeras medidas que se tomarían en previsión del desalojo anunciado por Bonifaz, que consistían en una jornada de limpieza de las calles del complejo como una forma de mejorar la imagen del comercio ambulatorio frente a la “opinión pública” y ante las autoridades, mostrando un gesto de buena voluntad, además se acordaba el cobro de una cotización de 5 soles por asociado para solventar los gastos de las acciones a tomar y las negociaciones con la municipalidad. Para controlar el cumplimiento de los acuerdos, el comunicado anunciaba que:

“7.- La comisión se encargará de inspeccionar que el asociado cumpla con el alineamiento, altura y entre otros a partir del día sábado 9 de enero en forma indefinida.

8.- El asociado que no cumpla con todos estos acuerdos serán suspendidos con 2 días de su sitio de trabajo, *haciéndole escándalo con todos los compañeros*.”³³

32. Para que el crédito informal funcione, también es necesario que el lugar ocupado en la calle tenga un potencial económico importante en términos de clientela, como sucedía en Gamarra hasta antes del desalojo.

33. El subrayado es nuestro.

Existen tres diferentes niveles de organización de los comerciantes informales. El primero y más elemental de ellos agrupa a los ambulantes de una misma cuadra o incluso de la mitad de una cuadra, un ejemplo de ello es ya citada Asociación 8 de Enero de la cuadra 8 del Jr. Gamarra, otro es la Asociación Juan Velasco Alvarado que agrupa a los informales de la primera mitad de la cuadra 6 del mismo jirón. Es a este nivel donde las organizaciones pueden cumplir con mayor eficacia su rol de mediación de conflictos entre sus miembros ya que las redes de confianza interpersonal son más fuertes. Sin embargo cuando se trata de negociar con las autoridades municipales son necesarias agrupaciones de mayor envergadura.

Un segundo nivel consiste en la asociación de algunas de estos primeros tipos de organizaciones. En nuestro caso pude conocer y entrevistar a dirigentes de la Central Coordinadora de Asociaciones Autónomas de Comerciantes de Gamarra (CCAACG) creada recientemente en 1997³⁴. Otra de estas organizaciones presentes en Gamarra desde hace ya varios años es la Asociación Túpac Amaru II (ATA). Si bien en sus orígenes la ATA agrupaba a ambulantes de Gamarra, poco a poco los miembros pertenecientes al grupo de ambulantes de La Parada fueron adquiriendo mayor importancia en las bases y en la dirigencia.

20

El tercer nivel son las centrales o federaciones de asociaciones de informales. En La Victoria existe el Frente Unico de Trabajadores Ambulantes de La Victoria (FUTAVIC) creado en 1997 y fue producto de la concertación de los ambulantes frente a los primeros intentos de reorganización del comercio informal por parte de la gestión de Olazábal, que culminaron en un primer acuerdo entre el municipio y los ambulantes. Las bases de la FUTAVIC están compuestas por una serie de asociaciones que hemos llamado de segundo nivel de comerciantes informales, en especial de los alrededores de La Parada y de Gamarra, aunque son los primeros quienes constituyen el contingente de mayor importancia e influencia en ella.

Los mecanismos que pueden crear solidaridad y confianza, así como una presión social mayor del grupo sobre sus miembros funcionan en grupos no demasiado extensos de personas. Hay que recordar que las actividades de los informales se desarrollan en un clima de ardua competencia (sea por la clientela o por las mejores ubicaciones). Esta es una de las razones por las cuales, salvo en contextos donde la amenaza externa es importante y pone en peligro la estabilidad de todo un sector de informales (como el desalojo de Gamarra), instancias que centralizan las distintas organizaciones de ambulantes, no tienen un funcionamiento continuo o una legitimidad reconocida en forma amplia.

34. Entre sus bases se encuentran, entre otras la Asociación 8 de Enero y la Juan Velasco Alvarado. Felipe Dávila, presidente de ésta última es el coordinador general de la CCAACG.

La aparente centralización de las asociaciones de trabajadores informales dista mucho de la realidad, al igual de lo que sucede entre las organizaciones de empresarios formales los conflictos por la representación del comercio informal son muy intensos. Lo que está en juego es la capacidad de los dirigentes de negociar las demandas de los informales frente a la autoridad municipal, así como permitir el acceso de nuevas personas a puestos de trabajo en las calles de las zonas que controlan, lo que les “autoriza” a disponer de las cotizaciones de sus miembros tanto para sus gastos de representación como para su propio provecho personal. Muchos de los dirigentes han asumido esa actividad como medio de vida. Vendedores ambulantes y empresarios formales me han informado que algunos dirigentes trafican con los puestos de las calles, que controlan mediante una red de allegados o de matones que contratan entre los habitantes de las zonas más peligrosas de La Parada. Ello convierte a algunas agrupaciones de segundo y tercer nivel en organizaciones de tipo mafioso.

En algunos casos los conflictos por el control de estas organizaciones asumen formas claramente delincuenciales. Tuve conocimiento del caso de un secretario de organización de la Asociación Túpac Amaru que fue asesinado en abril de 1996 en circunstancias poco claras, pero que al parecer tenían que ver con desacuerdos profundos en la forma de negociar con la nueva administración municipal de Olazábal que se instaló en enero de ese año.

En ocasiones, el cuestionamiento de las federaciones o los frentes de trabajadores informales provocan la ruptura de los mismos y la conformación de otros. Esto es posible cuando las bases cuentan con una posición privilegiada en el contexto de las calles dedicadas al comercio informal, lo que les permite a sus miembros mayores niveles de autonomía. Este es el caso de los vendedores informales del Jirón Gamarra (la calle más “atractiva”, comercialmente hablando), cuyas asociaciones por cuadra decidieron separarse de la Asociación Túpac Amaru y formar la CCAACG, ya que cuestionaban la transparencia de su mediación con el municipio. Augusto Allca, dirigente de la asociación 8 de Enero de la cuadra 8 del Jirón Gamarra nos contó cómo decidieron formar la Central Coordinadora de Asociaciones Autónomas de Comerciantes de Gamarra a mediados de 1997:

“Nosotros los de 8 de Enero llegamos a la Central Coordinadora porque antes había una junta directiva Túpac Amaru que centralizaba todo lo que es el comercio informal de La Victoria y abusaba de las asociaciones con cobros de hasta 7 soles. Nos dimos cuenta que el municipio tenía un reglamento para el comercio informal, conversando con el propio Olazábal nos dijo que si queremos trabajar en Gamarra teníamos que cumplir con el reglamento. Me di cuenta que lo que decía Túpac Amaru no era cierto, que no negociaban con el alcalde y más bien se enfrentaban, ellos nos engañaron y por eso me acusaron de amarillo y de chupamedias del alcalde por criticarlo (al dirigente de Túpac Amaru). Entonces decidimos salirnos de Túpac Amaru y formar la central.”

En este corto testimonio podemos apreciar también que una de las estrategias de negociación de los dirigentes y de las asociaciones con las autoridades municipales es mostrar ante sus bases un cierto radicalismo y vehemencia que los legitima como defensores de sus intereses. Estas posiciones extremas son a menudo rechazadas por las bases ya que la permanencia en la calle de los informales depende mucho del consentimiento del municipio. Para callar las críticas de sus miembros, las federaciones y centrales utilizan mecanismos de presión que intentan afectar la reputación de los posibles desertores, acusándolos de amarillos y de poner en peligro la unidad de los informales al intentar negociar por su cuenta.

Tuve la ocasión de presenciar una reunión de dirigentes de las asociaciones por cuadras de la Central de Asociaciones Autónoma de Comerciantes de Gamarra 6 días antes del primer desalojo realizado el 18 de febrero de 1999. Allí se discutieron las alternativas que los ambulantes podían negociar con la municipalidad, cuyas autoridades habían accedido a conversar con ellos en una reunión citada en los días siguientes. Uno de los acuerdos fue de solicitar por lo menos un plazo adicional para la reubicación que sea posterior a la campaña escolar de marzo y abril, momento en el cual se pueden hacer ventas importantes de prendas escolares. Sin embargo los dirigentes no se atrevieron a llegar a acuerdos definitivos sin que antes se convocara a una asamblea de “todos” los comerciantes ambulantes de Gamarra (cosa que era difícil debido el corto plazo que quedaba). El temor era generar la desconfianza de las bases respecto de sus dirigentes que podrían creer que se estaba negociando a sus espaldas y obteniendo algún beneficio a cambio de una transacción pacífica. Se quería evitar ser acusados de “amarillos” y “chupamedias” del alcalde, lo que podía dar pie a que dirigentes de otras centrales de ambulantes (como la Túpac Amaru) se aprovecharan de la situación asumiendo una actitud más “combativa”. El temor de perder la legitimidad de las bases paralizó la capacidad de negociación de las organizaciones y es indicador de la fragilidad de las iniciativas de centralización.

Me parece interesante señalar que argumentos aparentemente contrapuestos aparecieron en la reunión mencionada cuando se discutía acerca de la necesidad de llegar a acuerdos consensuales que no fueran motivo de desconfianza de las bases. Por un lado se hablaba de la necesidad de la “unidad de los hermanos ambulantes y compañeros”, que representan “la voz del pueblo que debe ser escuchada por los dirigentes”, mientras que al mismo tiempo se reconocía la desconfianza generalizada entre los miembros de la base y entre los propios dirigentes. Se hablaba de la existencia de varios “Pepe el vivo” que sólo buscan beneficiarse de lo que se logra en conjunto mientras se aseguran un nuevo puesto en otro lado o regresan a los locales que poseen en las galerías de la zona. Es una especie de esquizofrenia que oscila entre la valoración casi mítica de la unidad de las bases y los intereses individuales siempre presentes. Las estrategias resultantes son fruto de esa ambigüedad: apoyar acciones unitarias, incluso radicales, que puedan significar algún beneficio (como un plazo adicional para quedarse en las calles), al mismo tiempo que se ponen en marcha salidas individuales.

El que ciertos grupos negocien con la autoridad por fuera de los canales centralizados es un riesgo para la continuidad de los dirigentes. Como se mencionó, ser dirigente es también un medio de vida que trae beneficios económicos que no dejan de ser importantes en un medio precario como el del comercio informal.

Cuando entre febrero y marzo del 1999 se hizo evidente que el municipio no iba a retroceder en su decisión de erradicar el comercio informal de la zona de Gamarra y de la Avenida Aviación, la actitud de los dirigentes de algunas organizaciones de segundo y tercer nivel (en particular la FUTAVIC y la Túpac Amaru) se radicalizó. Las asociaciones de menor nivel que eran conscientes de lo inevitable del desalojo intentaron negociar separadamente alternativas de reubicación con la municipalidad lo que provocó represalias importantes. Varios dirigentes, en especial de las asociaciones de primer nivel y algunos de las de segundo nivel (como la CCAACG), fueron hostigados por la FUTAVIC, incluso se llegó a atentar físicamente contra dirigentes que intentaron negociar acuerdos por separado.

Hemos visto que hay una amplia gama de formas mediante las cuales las organizaciones generan sistemas que aseguran los “derechos especiales de dominio” entre los ambulantes, resolver conflictos al interior del grupo, así como los beneficios que de ellos puede obtenerse. Estas formas van desde redes de confianza interpersonal, presiones del grupo, hostigamiento y hasta amenazas físicas. Cuanto menos cercanía hay en el grupo de pares, las confianzas se debilitan y se recurre más a elementos coercitivos que pueden llegar al uso de la violencia, como en el caso de las centrales. Ello parece suceder cuando lo que está en juego es la continuidad de la ocupación de las calles y las alternativas en las negociaciones con la autoridad municipal se van acabando, lo que puede radicalizar las posiciones de quienes tienen en las asociaciones un medio de vida.

Si bien estos son algunos de los mecanismos que se utilizan en la negociación de acuerdos y reglas entre los propios ambulantes, cuando se negocia con la municipalidad, las estrategias son distintas. Aquí de lo que se trata, como bien señala Guersi, es extraer del Estado elementos de seguridad para la continuidad del uso de la vía pública como recurso económico y de sobrevivencia. En tal sentido, a diferencia de lo que sucede al interior del grupo donde la confianza es un elemento importante, el reconocimiento “formal” de una situación “informal” resulta central.

Los acuerdos que se llegan entre las autoridades y los municipios deben traducirse en documentos o medidas que aparenten una cierta legalidad y por lo tanto legitimen la situación de informalidad. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con los impuestos municipales que pagan los ambulantes tales como la SISA o el “Derecho de Ocupación de la Vía Pública”.

Por otro lado, los dirigentes de los ambulantes tienen siempre el cuidado de llevar a todas sus reuniones copias de las actas y los documentos que son producto de las negociaciones con la municipalidad y al interior de las mismas asambleas de informales. Entre estos documentos tienen un valor especial aquellos que contienen las ordenanzas municipales que regulan en comercio informal, como un reglamento que publicó el municipio de La Victoria a fines de 1996 donde se establecían los “módulos ambulantes” en la zona de Gamarra.

Estos documentos son enarbolados como símbolos de reconocimiento y legitimidad en toda reunión. En algunos casos se interpreta en forma positiva, disposiciones que van en contra de los intereses de los vendedores informales, como ocurrió con la ordenanza que publicó el municipio de La Victoria en enero de 1999 donde se anunciaba el desalojo de los comerciantes ambulantes de la zona de Gamarra y la Avenida Aviación. En esa ordenanza la municipalidad se daba el plazo de seis meses para reordenar el comercio informal. Los dirigentes de los ambulantes interpretaron que tenían seis meses más para quedarse en sus puestos y en la acción de amparo que presentaron al poder judicial para evitar el desalojo argumentaron que la propia municipalidad violaba su ordenanza al proceder con el desalojo 5 meses antes de culminado el plazo. Obviamente, lo que la administración local quería decir es que en el transcurso de esos seis meses debía reordenarse el comercio ambulatorio.

Este tipo de utilización de mecanismos institucionales para legitimar prácticas que son informales tiene alguna semejanza con lo que Merton describe como conducta ritualista³⁵ en su teoría de la anomia. Según Merton este fenómeno es un tipo de conducta desviada que representa un mecanismo de adaptación frente a una situación de incompatibilidad entre las normas institucionales, los valores culturales y los medios que la estructura social deja a disposición de las personas para llevarlos a cabo. El ritualismo es una situación donde “se abandonan las aspiraciones culturalmente definidas mientras se sigue acatando en forma casi compulsiva las normas institucionales”³⁶, sin embargo, Merton agrega que el ritualismo “es consecuencia no tanto de la super-identificación con las reglas y la habituación a las prácticas consagradas, como de la falta de seguridad en las relaciones sociales importantes dentro de la organización”³⁷, en consecuencia el ritualista social es quien “reacciona a una situación que parece amenazadora y provoca desconfianza aferrándose todo lo más estrechamente posible a las rutinas seguras y a las normas institucionales”³⁸.

35. Robert K. Merton, *Teoría y estructura sociales*, Fondo de Cultura Económica, 2da. Ed. México, 1964, pg. 191-194.

36. Ibid, Pg. 191.

37. Ibid, Pg. 192, el subrayado es nuestro.

38. Ibid, Pg. 193.

Al hacer referencia a la teoría de la anomia de Merton es necesario tener cuidado de no identificar mecánicamente conductas observadas con conceptos teóricos. Para ello es necesario considerar el contexto de normas y procesos estructurales que provocan la aparición de este tipo de conductas. En nuestro caso estamos en una situación de heterogeneidad y multiplicidad de los principios que organizan el orden social. Mencione en la introducción la propuesta de Catalina Romero acerca la sociedad peruana como fruto de “arreglos” entre diversos órdenes heterogéneos y contradictorios a partir del cual se habría configurado una idiosincrasia, normas y reglas de juego comunes, que nos da un principio de unidad, pero con la dificultad que ello implica para generar consensos duraderos. En tal sentido, según Romero, la anomia en el Perú estaría “institucionalizada”, lo que nos remite a una condición estructural de la sociedad más allá de la descripción de conductas individuales³⁹.

Frente a una situación de sistemas y principios heterogéneos pero interrelacionados, surge el problema de la falta de confianza en las relaciones sociales y de la estabilidad de los acuerdos. Sin embargo, en nuestro caso las conductas que podrían calificarse como anómicas tales como el ritualismo, no representan, diferencia de lo que plantea Merton para la sociedad norteamericana de los años 30, un tipo de conducta desviada, ya que no existe un orden tanto de valores culturales como de mecanismos institucionales de acción que sea hegemónico y claro para todos y que imponga una regla estable. Deben considerarse como estrategias de adaptación o de tránsito, que utilizan algunos de los recursos que les ofrece su relación con la institución municipal (los reglamentos y ordenanzas) para generar nuevos tipos de arreglos entre situaciones donde las reglas son ambiguas, con el objetivo de buscar seguridades para las estrategias sociales de más largo plazo, sean éstas de sobrevivencia o de movilidad social. No es, por lo tanto, un problema de ausencia o presencia de normas, sino de la seguridad que las negociaciones que éstas representan puedan otorgarle a las estrategias de los actores.

De esta forma, las estrategias deben combinar y hacer uso de los recursos y principios de los diferentes ordenes sociales donde se desenvuelven los individuos simultáneamente. En las negociaciones entre los comerciantes informales y las autoridades municipales, estas estrategias de “geometría variable” se ponen en juego. Se buscan seguridades mediante el reconocimien-

39. Para Durkheim, uno de los teóricos clásicos de la anomia, ésta es una condición de la sociedad y no de los individuos. En realidad, hablar de “anomia institucionalizada” es una forma de ir más allá del concepto mismo (que ha sido desarrollado en sociedades y contextos históricos diferentes) y hacer preguntas más profundas acerca de las características del orden social en el Perú. En un trabajo publicado en 1991 junto con Juan Carlos Carrillo, hicimos un balance crítico del debate acerca de la anomia como concepto para explicar procesos de la sociedad peruana en el cual participaron desde diversos artículos, además de Catalina Romero, Hugo Neira y Nicolás Lynch. Ver: Juan Carlos Carrillo y David Sulmont, “¿Teoría de la anomia o anomia de la teoría?”, en: *Debates en Sociología*, No. 16, PUCP, Lima 1991.

to formal con actas, documentos, pago de tasas municipales, o reglamentos sobre el comercio ambulatorio; se realizan campañas para mejorar las relaciones públicas y crear climas de confianza como las de limpieza de calles por parte de los informales; pero también se recurre al soborno de los policías municipales. Otro mecanismo es la articulación con redes clientelistas que puedan garantizar la protección de políticos necesitados de una legitimidad social, como en el caso de las vinculaciones de algunos comerciantes ambulantes con el movimiento Vamos Vecino de La Victoria, cuyo candidato Miguel Angel Mufarech⁴⁰, ofrecía no expulsarlos de Gamarra.

Del mismo modo, hemos visto que al interior del grupo funcionan combinaciones de reglas y principios múltiples para resolver los conflictos y asegurar la cohesión social en distintos niveles: la confianza interpersonal, las relaciones de parentesco, paisanaje o vecindad, la presión comunitaria, la formación de redes clientelistas o mafiosas al interior de las organizaciones para acceder o permanecer en los puestos, hasta la coerción con amenaza de uso de la violencia (que puede llegar hasta la concreción de esa amenaza).

En las estrategias múltiples de negociación entre los informales y la autoridad, una característica central es la búsqueda de acuerdos mediante mecanismos que intentan excluir en lo posible el recurso a la confrontación directa, siempre y cuando las correlaciones de fuerza y los proyectos de los diferentes actores no provoquen situación de ruptura como fue el caso en la coyuntura del desalojo de Gamarra.

En el trabajo de Carbonetto y otros sobre el comercio informal en Lima⁴¹ hay una sección dedicada al comportamiento político de los informales. Allí se hace un balance acerca de las reflexiones de distintos autores sobre las “motivaciones de los pobres en la ciudad” y sus consecuencias en las acciones políticas:

“(...) el afán de integrarse a los circuitos económicos urbanos, la perspectiva de obtener apoyo gubernamental, los riesgos inherentes a las actividades políticas no reconocidas, entre otros factores, alientan un comportamiento político no violento. Dietz (1975) indica que, siendo los principales objetivos de sus reivindicaciones los de tipo material, las formulaciones de sus demandas tienden a orientarse por el camino de la petición y el arreglo burocrático.”⁴²

40. “No sacaré a los ambulantes. Tampoco los quiero dejar como están. Los quiero ayudar a modernizarse, a que se formalicen (...) se ubicará en módulos y por rubros a los ambulantes, por ejemplo, polos en la cuadra 5, pantalones en la 6, o la gente que vende comida en las esquinas. Con este sistema los ambulantes quedarán registrados.” Entrevista con Miguel Angel Mufarech, *Revista Gamarra*, No. 59, Setiembre de 1998.

41. Daniel Carbonetto *e. al.*, *Lima: Sector Informal*, Op. Cit., Tomo II.

42. Ibid., Tomo II, Pg. 405.

Para que la ruptura no se produzca, la autoridad debe tener la voluntad de negociar. Esta voluntad puede aparecer por diversas razones. Una tiene que ver con el problema de gobernabilidad y capacidad de gestión, hemos visto los graves problemas administrativos y de corrupción al interior del municipio victoriano que son un motivo por el cual, en gestiones anteriores, no ha sido posible tomar acciones más enérgicas con respecto al comercio informal. Otro elemento es el cálculo político, la posibilidad de enajenarse o de atraer sectores sociales electoralmente importantes que pueden ser seducidos por actitudes de reconocimiento o medidas “populistas”. Por otro lado, no hay que olvidar intereses económicos de funcionarios o autoridades municipales que tienen en los impuestos cobrados a los ambulantes una fuente de recursos económicos relativamente sencilla de obtener. Esto último es un argumento utilizado por los informales para negociar. Al respecto, Felipe Dávila, dirigente ambulante nos decía:

“El municipio tiene plata para hacer obras, pero no tiene buena administración. Fíjese que en Gamarra hay como 10,000 ambulantes, si a cada uno se le cobra un sol diario por ocupación de la vía pública se tiene un montón de plata para hacer obras.”

En la coyuntura del desalojo de febrero y marzo de este año, la correlación de fuerzas entre los diferentes actores involucrados cambió de tal forma que se produjo una confrontación directa entre las autoridades municipales y los vendedores informales.

En primer lugar, Somos Perú, quien ganó la alcaldía por una diferencia de más de 20,000 votos sobre su más cercano rival, Vamos Vecino, tenía una línea mucho más definida con respecto al problema del comercio ambulatorio y no iba a aceptar compromisos que significaran una permanencia adicional de los informales en las calles del complejo de Gamarra y los alrededores del mercado mayorista. La trayectoria de esta agrupación y de sus líderes, desde la municipalidad de Miraflores a la de Lima Metropolitana, ha estado marcada por una decisión firme de reordenar el comercio informal y ofrecer programas de paulatina formalización. El equipo de la municipalidad provincial que dirigió el proceso de reordenamiento del comercio informal en el centro histórico fue quien asesoró a la municipalidad de La Victoria en su plan respecto a la zona de Gamarra y La Parada.

Hay que tomar en cuenta que esta línea de conducta con hacia el comercio ambulatorio ha tenido repercusiones políticas positivas en la opinión pública, creando una imagen de eficiencia y firmeza del grupo de Somos Perú para enfrentar problemas que otras administraciones municipales no han podido solucionar. Esta firmeza en la llamada “recuperación del principio de autoridad” fue uno de los argumentos utilizados en la campaña electoral de 1998, y tuvo importantes impactos, sobre todo en sectores medios de la capital, los cuales son, según lo muestran los sondeos de opinión, el electorado más favorable hacia Somos Perú. Evidenciar la misma firmeza

y determinación en La Victoria, un distrito tradicionalmente visto como problemático, es parte de una estrategia política destinada a demostrar que los líderes de Somos Perú, en especial Alberto Andrade, son también capaces de enfrentar eficazmente los problemas, haciendo uso cuando es necesario de una “mano dura”. La necesidad de imponer “mano dura” en la solución de los problemas ha sido utilizada por el presidente Fujimori como argumento para justificar su estilo político y que ha tenido eco en el electorado nacional.

Por otro lado, la consolidación entre los empresarios más importantes de Gamarra de un grupo de interés económico con capacidad de ejercer presión política, ha sido un elemento central que ha pesado en la decisión del municipio de La Victoria de proceder a la reubicación de los ambulantes en los primeros meses de la nueva gestión. Es en los últimos meses de la campaña electoral municipal que la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, que agrupa a algunos de los empresarios más influyentes y exitosos de la zona, comienza a tener una visibilidad mayor en los medios de comunicación, y una capacidad de negociación importante con las autoridades del gobierno. En esas negociaciones, los empresarios de la coordinadora obtuvieron una serie de concesiones como una ley del Congreso que prohibía la importación de ropa usada y la participación en una comisión gubernamental de lucha contra el contrabando, ambas actividades que perjudicaban la economía de Gamarra en un contexto de crisis y recesión agravada. De esta forma la Coordinadora de Empresarios de Gamarra logró hegemonizar la representación de los intereses de los empresarios de la zona, desplazando a otros grupos como las organizaciones de pequeños y medianos confeccionistas.

El plan inicial del municipio era desalojar primero a los comerciantes informales de la Avenida Aviación y la zona de La Parada, ya que es allí donde se encontraban las instalaciones más consolidadas (los kioscos de madera, algunos de 2 pisos y con base de cemento en la berma central de la Av. Aviación), pero por presión de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, se decidió comenzar por la zona de Gamarra.

Como se mencionó páginas atrás, en febrero de 1999, aparece un comunicado de la Coordinadora apoyando decididamente el desalojo producido el 18 de ese mismo mes, e instando a la municipalidad a no ceder frente a los intentos de los comerciantes informales de mantenerse en la zona. Como gesto de apoyo, algunos empresarios de la coordinadora ofrecieron ubicar a los vendedores informales en puestos vacíos de las galerías de su propiedad, con facilidades interesantes en el pago de alquileres⁴³. Sin embargo varios comerciantes informales no aceptaron esta propuesta ya que los puestos ofrecidos se ubicaban en los pisos superiores de las galerías, donde la afluencia de clientes es mucho menor.

43. También donaron uniformes para los miembros del serenazgo de La Victoria.

Como se sabe el desalojo de los comerciantes ambulantes se llevó a cabo en dos intentos. El primero ocurrió el 18 de febrero de 1999, lo que motivó una batalla campal que causó graves destrozos en la vía pública. Luego durante casi un mes, ante la inacción de la policía⁴⁴, varios comerciantes informales ocuparon nuevamente las calles. El segundo y definitivo desalojo se produjo casi un mes después.

En el intermedio los empresarios formales de Gamarra realizaron dos marchas hacia Palacio de Gobierno, demandando el apoyo del gobierno para desalojar definitivamente a los ambulantes y restablecer el orden, ya que se estaban perjudicando seriamente las actividades comerciales, las cuales estaban bastante afectadas por la recesión económica. Recordemos que todo esto ocurría en vísperas de la campaña escolar, un momento importante en la venta de prendas de vestir. Incluso se llegó a solicitar la intervención del ejército⁴⁵.

Frente a las presiones del municipio, los empresarios y los medios de comunicación, que demandaban una acción enérgica, la policía decidió finalmente intervenir conjuntamente con el personal municipal el 15 de marzo y desalojar definitivamente a los informales del complejo de Gamarra, cuyas calles de acceso principal fueron bloqueadas con contenedores para evitar nuevas “infiltraciones” y permitir los trabajos de remodelación que la municipalidad realizó durante casi 4 meses. Esos trabajos fueron inaugurados el 1 de Julio, en un acto que contó con la presencia de los principales empresarios de la zona, autoridades municipales de Lima, e incluso el vicepresidente de la República Ricardo Márquez (en ese entonces Fujimori se encontraba de viaje).

Es en esta coyuntura cuando los actores involucrados intensifican y diversifican sus estrategias de negociación o de salida. En el caso de los informales hay que distinguir a los dos grupos antes mencionados, por un lado los directamente perjudicados por el desalojo, es decir los informales de Gamarra, y por el otro aquellos que se convertirían en el siguiente blanco de la municipalidad, los comerciantes ambulantes de La Parada.

44. Atribuida a la confrontación política entre el ejecutivo y el líder de Somos Perú, Alberto Andrade, potencial rival de Fujimori en el 2000.

45. En una noticia publicada en el diario *El Comercio* el 24 de febrero de 1998, se informaba que en la marcha realizada el día anterior por los empresarios formales de Gamarra que llegó al Congreso de La República, los manifestantes “obtuvieron, por parte del legislador Carlos Blanco, segundo vicepresidente del Congreso, la promesa de que hoy contarían con protección policial para efectuar sus labores normalmente. Sin embargo, este compromiso no satisfizo a la mayoría, que prefiere al Ejército para que restituya el orden en la zona comercial más importante de La Victoria”. Esto es un indicador de hasta qué punto, para ciertos sectores de la población, la firmeza y “mano dura” (características asociadas con las instituciones armadas) pueden ser identificadas con el orden social y la eficacia de las acciones de las instituciones públicas.

Los segundos, que hegemonizaban la dirección de la FUTAVIC (organización de tercer nivel) empujaban a las organizaciones de los informales de Gamarra como la CCAACG a radicalizar su enfrentamiento con la municipalidad, como una forma de ganar tiempo y buscar sus propias alternativas. El conflicto entre ambos grupos de ambulantes condujo finalmente a una separación de ambos grupos que siguieron sus propias estrategias de negociación con el municipio.

Como consecuencia de ello la CCAACG se separó de la FUTAVIC decidió tomar acciones por su cuenta. Asesorados por una abogada que se presentaba como precandidata a las elecciones parlamentarias del año 2000 por el movimiento Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio, miembros de la CCAACG inician una huelga de hambre, ocupando el 2 de marzo la Iglesia de La Victoria, a media cuadra de la municipalidad, demandando ser atendidos directamente por el alcalde para negociar un plazo adicional (quedarse durante la campaña escolar) antes de ser reubicados. La misma noche que ocuparon la iglesia fueron desalojados de ella por la policía.

Además de las presiones que los empresarios formales ejercieron sobre el gobierno local y nacional, nos parece interesante mencionar algunos de los mecanismos que utilizaron para socavar los esfuerzos de los ambulantes por mantenerse en el lugar. Por un lado está la imagen que se intentó difundir de ellos en los diferentes medios de comunicación: los ambulantes eran responsables del caos, la inseguridad y la delincuencia; además su actividad económica se caracterizaba por una competencia desleal ya que no pagaban impuestos y vendían mercadería de contrabando perjudicando a la industria nacional y los empleos del sector textil.

Pero también hay otras estrategias que dan cuenta de la diversidad de redes políticas con las que cuentan los empresarios. Cuando algunos de los dirigentes de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra (CEG) se enteraron que la abogada que asesoraba a la CCAACG se presentaba a sí misma como perteneciente a las filas del movimiento Solidaridad Nacional, se contactaron con un familiar cercano de Castañeda Lossio (que resultaba ser también familiar de un miembro importante de la CEG) para verificar esta información y que por su intermedio, el dirigente de Solidaridad Nacional presionara a esta abogada para que se aleje del problema. Finalmente se averiguó que la asesora de la CCAACG no pertenecía a las filas de este movimiento político.

El 15 de marzo se produjo el desalojo final de los ambulantes de la zona de Gamarra. Esta coyuntura, que gozó de una cobertura periodística casi cotidiana, tuvo como una de sus consecuencias el debilitamiento de las facciones más radicales de la dirigencia de los ambulantes. En los meses siguientes la municipalidad procedió al desalojo paulatino de los puestos de la Av. Aviación, sin mayores incidentes, lo que es indicador de un proceso de negociación más exitoso y discreto entre los informales y las autoridades

locales. La importancia de la zona de Gamarra y los intereses económicos y políticos que ello genera (tanto entre los empresarios formales, los vendedores informales como las autoridades políticas), su especial visibilidad en el contexto nacional, así como la “mitología” que la rodea, han sido factores importantes en la forma que tomaron las confrontaciones.

LOS MEDIADORES POLÍTICOS Y SUS ARTICULACIONES

En la sección anterior, intenté describir cómo se construyen sobre la base de múltiples mecanismos una serie de estrategias políticas que negocian arreglos que les permiten a los actores involucrados desarrollar sus objetivos. Como vimos, estos acuerdos pueden cambiar radicalmente conforme se configuran nuevas correlaciones de fuerza.

En esta sección, me interesa reflexionar sobre un tipo particular de actores que posibilitan la construcción de las diferentes estrategias políticas, al poner en contacto intereses de grupos determinados con una esfera pública que representa en cierto modo una fuente importante de recursos los proyectos de estos grupos.

En el texto de Friedberg citado en la introducción⁴⁶, se menciona la importancia que tienen lo que denomina los “relevos” (relais) entre diferentes sistemas de acción organizada para la negociación de los ordenes locales. Este tipo de relevos pueden ser los mediadores políticos.

En todas las sociedades, las personas más activas e interesadas en involucrarse en la política y hacer el papel de mediadores entre los distintos ámbitos sociales y la esfera pública son y serán siempre una minoría. ¿Cómo aparecen líderes locales?, ¿cuáles son sus estrategias?, ¿cómo se legitiman ante sus pares o su comunidad?, ¿qué relaciones mantienen con ellos y cómo logran articularse en redes o maquinarias políticas más amplias?, pueden ser preguntas que aporten nuevas luces sobre los procesos que construyen correas de transmisión entre el campo de la acción política y los intereses y demandas que vienen de los distintos grupos sociales. En cierta medida, al respecto del tema de la participación ciudadana, estamos cambiando la interrogante sobre cuántos participan y en qué, por aquella que indaga sobre quiénes permiten la participación, o dicho de otro modo, a través de quiénes se participa en la esfera pública.

En un estudio sobre participación política de pobladores de asentamientos humanos de Lima Metropolitana en los años 70, bajo el régimen

46. Erhard Friedberg, *Le pouvoir...*, Op. Cit.

de la dictadura militar, Henry Dietz⁴⁷ aplicó una encuesta destinada a determinar patrones de participación en estos contextos. En ese trabajo se interrogó acerca de las variables que diferenciarían a los activistas de las organizaciones sociales de los asentamientos humanos de los inactivos. Lo interesante de su análisis es que ninguna de las variables socioeconómicas “clásicas⁴⁸” que utilizó explica en forma clara las diferencias entre los activos e inactivos. Una razón es que el caso que estudia corresponde a una población bastante homogénea (habitantes de asentamientos humanos urbano-marginales). Sin embargo una de las conclusiones a las que parece llegar es que los que más participan son los más interesados en la vida local y política y en ese sentido es algo tautológica (participan los que más participan), siendo difícil rastrear mediante las preguntas estándar de una encuesta, la identidad “sociológica” de los más involucrados en la vida política local.

Frente a este problema, pienso que para identificar quiénes pueden aparecer como líderes políticos es necesario ver cómo ciertos individuos logran acumular un “capital de intermediación” entre la esfera social y la política, a partir de su trayectoria dentro de diferentes grupos sociales de pares. Me parece que ello está relacionado con procesar experiencias personales que ponen en contacto a ciertos individuos con distintos niveles de decisión sobre asuntos que resultan conflictivos para los actores sociales del medio en el que se desenvuelven.

32

El estudio de la experiencia de presidentes vecinales en Lince puede aportar algunas pistas interesantes al respecto. Los presidentes vecinales eran personas elegidas por los vecinos de una determinada zona de Lince. Para ello el municipio, desde 1996 agrupó las manzanas del distrito y las agrupó formando distintas zonas (primero 7 y finalmente 14). En cada una de ellas, se organizaron elecciones no obligatorias de vecinos utilizando el siguiente mecanismo: los interesados en ser presidentes vecinales debían estar inscritos en el padrón electoral y presentar una lista de firmas de 30 vecinos que apoyen su candidatura, para ser electos se necesitaba por lo menos el doble de votos.

En todo caso, tanto quienes se presentaron como candidatos como quienes votaron en esas elecciones fueron una clara minoría de los aproximadamente 49,000 vecinos mayores de 18 años que viven en el distrito. En este punto es importante recordar que, al igual que varios de los distritos más antiguos y consolidados de la ciudad, en Lince existe una gran desproporción entre electores inscritos y electores efectivamente residentes en el distrito, producto de las dinámicas demográficas propias de estos lugares. Según da-

47. Henry A. Dietz, *Pobreza y participación política bajo un régimen militar*, CIUP, Universidad del Pacífico, Lima, 1986.

48. Nivel educativo, ingresos, ocupación. No se incluyó el sexo ya que la muestra estaba compuesta casi exclusivamente por hombres, lo que sí puede constituir un punto de clivaje importante.

tos de la ONPE y las proyecciones estadísticas del INEI, en 1995 Lince tenía 90,308 electores registrados, ello significa que el padrón electoral representaba el 184% de los ciudadanos mayores de 18 años que efectivamente viven en el distrito. Esta desproporción tiene consecuencias importantes en la política distrital y las elecciones municipales, ya que da menos chance a las listas independientes locales frente a las listas provinciales que son más conocidas por los votantes que no viven al interior de este tipo de distritos.

En este contexto nos preguntamos, ¿quiénes se interesan en participar en la política local?, Para intentar responderla, me interesó ver un poco más de cerca las personas que decidieron postular como presidentes vecinales y como autoridades municipales en Lince. Al evaluar las entrevistas realizadas a los 8 presidentes vecinales que se lograron contactar, podemos apreciar las siguientes características.

En primer lugar se trata de personas instaladas en el distrito desde hace varios años, en general más de 20, muchos de ellos han vivido toda su vida en el distrito. Es también un grupo de personas mayores, el promedio de edad de los 8 entrevistados es de 51 años, sólo dos de ellos tenían menos de 40, pero ninguno era menor de 30 años. Entre ellos hay por lo menos dos jubiladas. Sus familias están ya constituidas, la mayoría tiene hijos mayores y hasta nietos. Se nota una clara predominancia de los hombres. En 1997 se eligieron 2 mujeres entre 11 presidentes vecinales; en 1998 hubo 3 mujeres en un grupo de 14 presidentes.

Entre los presidentes vecinales electos en 1998, la mayoría son profesionales que trabajan como empleados o en forma independiente (abogados, profesores, administradores de empresas), aunque también hay dos de ellos que tienen hasta secundaria completa. Cinco de los 8 presidentes vecinales entrevistados manejan su propio negocio dentro del distrito (una sastretería, un puesto de periódicos, una lavandería, un restaurante y una imprenta), otro de ellos, un economista asesor de micro-empresas atiende a sus clientes en su propio domicilio, las otras dos personas (dos mujeres) son jubiladas.

Como vemos se trata de un grupo de personas asentadas en Lince desde hace tiempo, que tienen una edad promedio “madura”, con familias ya constituidas, por lo que no tienen las responsabilidades de mantener o educar hijos pequeños. Además de ser residentes, tienen intereses muy concretos en el distrito, ya que es ahí donde desarrollan su actividad profesional, fundamentalmente en el rubro de comercios y servicios. En el caso de 5 de ellos que tienen un negocio en el distrito, es de suponer que su clientela está compuesta en gran medida por sus propios vecinos, lo cual puede llevarlos a tener un contacto cotidiano y fluido con ellos y enterarse acerca de lo que pasa en el barrio.

Otro rasgo saltante es que prácticamente todos tienen una trayectoria

en organizaciones sociales, sobre todo vinculadas a la vida barrial o del distrito: Asociación de Propietarios de Lince, Comité Cívico de Apoyo a la Policía Nacional, Frente de Defensa de Lince, o asociaciones religiosas barriales. Es decir, además de su propia actividad comercial o profesional, tienen estos otros espacios de contacto con sus vecinos.

Algunos de ellos también tienen experiencia organizativa en otros ámbitos, ligados a su desempeño profesional: sindicatos, asociación de ex-trabajadores o gremios profesionales, uno de ellos ha tenido experiencia direccional en su época de estudiante universitario.

En cuanto a relaciones con organizaciones políticas, notamos que en el caso de 6 de los 8 presidentes vecinales entrevistados, ha existido un vínculo con movimientos o partidos políticos. Tres de ellos han sido militantes del APRA (uno lo sigue siendo). Una de las presidentes vecinales que declaró haber sido militante aprista hace algunos años, también confesó haber tenido fuertes relaciones con la Unión Nacional Odriísta, de la cual fue candidata a diputada por Cusco en las elecciones de 1990, debido a sus vínculos con la asociación Provinciana de La Concepción, lugar donde ella nació. En el caso de otro de los ex-apristas han habido acercamientos con el Movimiento Vamos Vecinos, organización que incluso lo invitó a postular como regidor en las últimas elecciones (invitación que no aceptó). En el caso de los otros tres presidentes vecinales relacionados con agrupaciones políticas, se trata del movimiento “Mi Distrito”, de carácter distrital, dirigido por Dante Yorges, ginecólogo que tiene su consultorio en Lince y que ha sido regidor por Somos Lima en la gestión 1996-98.

Entre estos 6 personajes encontramos a las personas que han buscado hacer “carrera” en el ámbito político local, e incluso nacional (una señora fue candidata a diputada en 1990). Uno de ellos fue regidor años atrás por el APRA y candidato por el mismo partido en las últimas elecciones municipales. Otros dos han sido candidatos a regidores en la lista “Mi Distrito”, resultando ser electo uno de ellos (el más joven de todos, economista y propietario de una lavandería en el distrito).

Según nos fue mencionado en varias entrevistas (tanto de autoridades como de presidentes vecinales) casi todos los presidentes vecinales buscaron ser candidatos, ya sea a alcalde o a regidores en diversas listas que se presentaron en el distrito, en especial las listas independientes, del APRA o de Vamos Vecinos, con la notable excepción de Somos Perú. Se pudo confirmar esta afirmación para 3 de los 14 presidentes vecinales electos en 1998, y para uno que fue elegido en 1997 (quién según se nos dijo fue candidato a alcalde por Unión Por el Perú). Más allá de la exactitud de estas versiones (respecto a los demás presidentes vecinales), la impresión general es que la función de presidente vecinal ha servido para muchas personas como un espacio para desarrollar vocaciones de iniciar o continuar una “carrera política”. Otro dato al respecto es que 5 de los 11 presidentes vecinales de 1997 fueron re-

electos en 1998, y es entre estos 5 que encontramos luego un candidato a alcalde y otro a regidor en las elecciones municipales del año pasado.

Para resumir las principales características de los presidentes vecinales que se entrevistaron, elaboré el siguiente perfil de líder local, al que he denominado de “vecinos interesados”:

- Se trata de personas en edad madura, que en su mayoría han dejado de tener responsabilidades familiares “densas” (hijos pequeños en edad escolar) y por lo tanto pueden tener mayor tiempo disponible para dedicarse a otras actividades, además de sus propios trabajos.
- Tienen en su mayoría un grado de instrucción superior.
- Son residentes en el distrito desde hace tiempo.
- En varios de ellos, la actividad ocupacional que desempeñan se realiza dentro del distrito (negocios en el barrio) y los ponen en contacto con sus vecinos y la problemática de la localidad en forma cotidiana.
- Participan en organizaciones sociales del distrito, ya sea residenciales, religiosas o culturales, lo que constituye otro espacio de encuentro con sus vecinos. Se trata además, en algunos casos, de organizaciones vinculadas con los problemas de la localidad y la solución de los mismos (asociación de propietarios, comité de apoyo a la policía).
- Algunos tienen además experiencia asociativa relacionada con su experiencia laboral o profesional (sindicatos, asociaciones profesionales).
- Entre ellos encontramos varios con experiencia en organizaciones partidarias, locales o nacionales, lo que en ciertos casos se traduce también en la postulación u ocupación de cargos públicos, especialmente en el ámbito local.
- Algunos de ellos buscan y logran desarrollar una “carrera política” en el ámbito local, ya sea como presidentes vecinales, o como autoridades municipales.
- Están además motivados e interesados por participar en experiencias de gobierno local, buscan “hacer algo por su distrito” y están atentos a las iniciativas que puedan surgir desde el municipio y al impulso que puedan recibir de vecinos o amistades del barrio para hacer efectiva su participación.

Respecto a este último punto, en general se trata de iniciativas muy localizadas y particulares pero que dan cierta vida de barrio al distrito y logra interesar a los vecinos en tomar algunas medidas frente a los problemas. El hecho de enfrentar los problemas en forma colectiva es algo muy valorado por quienes las impulsan, como en muchas experiencias de organización social, el ejercer sus derechos o demandar algo a la autoridad, requiere de una acción colectiva, pero para que esa iniciativa tenga continuidad es necesaria la respuesta de las instituciones del gobierno local.

Si enfocamos nuestra mirada a las autoridades municipales, encontra-

mos también entre ellos rasgos similares. Por ejemplo: Eduardo Mostajo (alcalde de Somos Lima en la gestión anterior), Gustavo Fuentes (teniente alcalde en la gestión anterior), Víctor Tanaka (regidor de Cambio 90 en la gestión anterior y de Vamos Vecino en la actual), Dante Yorges (regidor de Somos Lima en la gestión anterior y candidato a alcalde en 1998), Félix Torrado (candidato a alcalde por Vamos Vecino en 1998) y Andrés Vásquez, (regidor por “Mi Distrito” y presidente vecinal en 1998) calzan casi perfectamente en el perfil que hemos desarrollado más arriba.

Sin embargo, lo que distingue a la mayoría de estas autoridades respecto de los “vecinos interesados” es que en su trayectoria han podido desarrollar una mayor densidad de contactos políticos con organizaciones y movimientos políticos.

En este punto quisiéramos entrar al tema de las articulaciones entre los liderazgos locales encontrados (“vecinos interesados”) y los movimientos políticos les permitirían desarrollar una carrera política. En un distrito como Lince, una de las razones por las cuales un paso “solitario” a la carrera política resulta particularmente difícil es la especial configuración de su padrón electoral mencionada párrafos más arriba.

36

Una vía para que los “vecinos interesados” se articulen organizaciones de mayor alcance es ser “captados” por los movimientos políticos, que ven en estas personas motivadas cuadros “atractivos”, ya que están interesadas por los problemas de su localidad y que tienen cierto respaldo y legitimidad entre sus vecinos. Para que el proceso de “captación” se lleve a cabo, para que el “vecino interesado” acepte vincularse en tal o cual agrupación, es importante que se desarrolle cierta relación de confianza, por ejemplo mediante un amigo o conocido, ya vinculado al movimiento político, que hace la invitación. Por otro lado es necesario anotar que muchas de las personas que aspiran a entrar en carrera están atentas a este tipo de invitaciones.

Las orientaciones ideológicas o programáticas, especialmente en la actual coyuntura política nacional, no tienen un peso determinante a la hora de relacionarse con los movimientos políticos. Al respecto es ilustrativo la respuesta de Víctor Tanaka, regidor de Lince por Cambio 90 en 1996-98 y actual regidor por Vanos Vecinos a la pregunta sobre por qué decidió aceptar la invitación de estos movimientos y no de otros:

“Creo que cualquiera que me hubiera invitado hubiera aceptado en ese momento, porque yo entraba a trabajar sin ver tintes políticos. Y acá tengo ese mismo pensamiento.”

Resultan más bien importantes las relaciones de confianza interpersonal que puedan generarse, y que se ofrezca un espacio y una organización que permitan desarrollar una carrera política. En las entrevistas se vieron casos de militantes apristas que se acercan a Vamos Vecino o a otros movi-

mientos (UNO), por otro lado se pueden mencionar los casos de Dante Yorges, Eduardo Mostajo, Waldo Olivos (actual alcalde de Lince por Somos Perú), Gustavo Fuentes (teniente alcalde de Lince en la gestión anterior) y Víctor Chumpitaz (regidor actual por Somos Perú) que han transitado por varias agrupaciones políticas, locales o nacionales (AP, Lima al 2000, Somos Lima-Perú, PPC, Mi Distrito).

El común denominador de estos casos es que se trata de “vecinos interesados” que en los múltiples ámbitos en los que se desarrolla su actividad profesional o social conocen a miembros que agrupaciones políticas provinciales o nacionales y que los invitan a participar de ellas.

Otra forma de entrar en “carrera”, involucra la acumulación de un capital importante de relaciones más propiamente políticas. En este caso se trata menos de “vecinos interesados”, y más bien de “profesionales de la política”, que son quienes estarían vinculados más directamente con los movimientos políticos metropolitanos o de carácter nacional, especialmente Somos Perú en el caso de Lince, aunque es conocido que en otros lugares estos políticos “profesionales” han sabido vincularse con Vamos Vecino.

Estaríamos entonces frente a un proceso que involucra varias etapas en la construcción de una carrera política. La primera consistiría en la de los “vecinos interesados” que al ir acumulando paulatinamente contactos con movimientos políticos mayores (por ejemplo mediante “captaciones”) se convierten en “políticos profesionales”, lo que vendría a ser la segunda etapa en este proceso, en tal sentido, estos últimos podrían calificarse como “vecinos interesados” con una mayor experiencia en la arena política local, provincial o nacional. Una tercera etapa en este proceso consistiría en la ocupación de cargos en la dirigencia de las organizaciones políticas que pueden significar la oportunidad de acceder a puestos más importantes en las instituciones públicas, tenientes alcaldes, alcaldes o funcionarios de confianza de mayor nivel.

A diferencia del grupo ubicado en la primera etapa del proceso, en las siguientes la participación en la política local no pasa directamente por el “interés vecinal” o el compromiso con el barrio (que puede ser un atractivo para las estrategias de captación de los movimientos políticos), sino cobran mayor importancia su vinculación más orgánica con las agrupaciones políticas y en particular con sus líderes.

Waldo Olivos, el alcalde actual del distrito es un claro ejemplo de personajes que han pasado por los tres niveles mencionados. Se trata de un empresario de ópticas, que tiene locales en Lince pero que vive fuera del distrito. Fue también jefe del cuerpo de bomberos voluntarios y se inició en la política local como regidor de Miraflores por Acción Popular durante la última gestión de Alberto Andrade en ese distrito. Si bien Olivos y Andrade procedían de filas distintas (el primero de AP el segundo del PPC), entabla-

ron amistad y confianza en la municipalidad de Miraflores a tal punto que al formarse Somos Lima, Andrade invitó a Olivos a que sea regidor metropolitano, dándole el segundo lugar en la lista (después del teniente alcalde). En las últimas elecciones municipales, Andrade designó a Olivos como candidato en Lince por sobre Mostajo, quien hasta semanas antes de la inscripción de las listas, era el candidato de Somos Perú a la reelección.

El equipo actual de regidores de Somos Perú en Lince, no encaja necesariamente en el perfil de “vecinos interesados”. Funcionarios de la gestión anterior y regidores de oposición, nos han manifestado que los miembros de Somos Perú que han asumido la marcha del municipio tienen menos relación directa con el distrito que en la administración anterior, especialmente nos mencionaron que en su mayoría no viven en Lince, aunque pueden tener vínculos comerciales o profesionales en la localidad.

En todo caso, al parecer, Somos Perú no recogió en 1998 liderazgos distritales locales entre sus miembros al momento de elaborar las listas para regidores, es decir no aprovecharon las fuentes del primer nivel que he mencionado. Se designaron más bien personas ubicadas en niveles superiores de la “carrera política” (etapas 2 y 3), gente de confianza, con una trayectoria política más densa y hasta cierto punto afín. A diferencia de Vamos Vecino y del propio Somos Perú en 1995, cuando todavía se llamaba Somos Lima (sin mencionar obviamente a las listas independientes distritales). Un ejemplo es Víctor Chumpitaz, regidor en Lince por segunda vez, abogado, ha sido militante del Partido Popular Cristiano y asesor de parlamentarios del PPC, actualmente se desempeña como consultor de gobiernos locales y ha trabajado en varias municipales cuyos alcaldes han estado relacionados al PPC.

Otra estrategia de acceso o incluso de construcción de organizaciones o movimientos políticos se basa en las redes familiares. En un contexto donde sistemas partidarios clásicos están en crisis, una forma de construir organizaciones políticas es mediante las redes de confianza más cercanas, que son la familia.

En Lince podemos mencionar a dos regidores de la gestión de Mostajo, que de acuerdo con las versiones de funcionarios de la municipalidad en ese entonces, eran yernos del alcalde. Tampoco ellos encajan en el perfil de “vecinos interesados”, aunque uno tuvo una experiencia en organizaciones sindicales de empleados cuando trabajaba para una empresa estatal. Esta vía de entrada a la vida política puede continuar o desarrollarse independientemente del vínculo familiar inicial. Concretamente, Jorge Estela Valdivia, yerno de Mostajo y regidor durante su gestión, ha continuado su militancia en Somos Perú a pesar que Mostajo fue “desembarcado” por Andrade, y actualmente es regidor en el distrito del Rímac por este movimiento, donde desempeña su actividad laboral (es gerente de servicios y de ventas de la filial de una corporación norteamericana).

En el caso de Somos Perú, la importancia de las relaciones familiares en la incorporación de algunas de sus principales figuras ha sido central. Hay varios ejemplos de familiares de Alberto Andrade que son figuras importantes en su movimiento: su hermano Fernando en Miraflores, su primo Jorge Bonifaz en La Victoria, su prima Nora Bonifaz (hermana del alcalde victoriano) ex-regidora de Miraflores y actual regidora en Barranco, entre otros.

Si bien el caso de la Gamarra que se expuso en la sección anterior guarda importantes diferencias respecto al de Lince, ya que lo que está en juego no son problemas vecinales o barriales sino una serie de intereses económicos vinculados a las características de un enclave industrial y comercial en medio de la ciudad, podemos encontrar trayectorias de intermediarios políticos que guardan similitud entre las tres etapas mencionadas (vecinos interesados, políticos profesionales, dirigentes).

En la primera etapa se puede encontrar a dirigentes de organizaciones menores de empresarios y comerciantes tanto formales como informales. Tal puede ser el caso de dirigentes de algunas asociaciones de ambulantes a nivel de cuadras o medias cuadras como Augusto Allca de la asociación 8 de Enero en el Jr. Gamarra o de Felipe Dávila, de la Juan Velasco Alvarado en la cuadra 6 de Gamarra, que posteriormente fue elegido coordinador de la CCAACG que agrupa este tipo de organizaciones. Existen casos en los cuales este tipo de dirigentes son captados o pasan a formar parte de organizaciones políticas. Tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos, Eliseo Arce, presidente del Sindicato de Kioscos de La Victoria que agrupa a quienes ocupaban este tipo de locales en la berma central de las primeras cuadras de la Av. Aviación. Arce es miembro del comité de Vamos Vecino de La Victoria y participó en la campaña electoral municipal de esta agrupación en Cerro de Pasco, lugar de donde es originario. Por otro lado, tuve conocimiento que varios dirigentes de asociaciones de ambulantes similares participaron en la formación del Movimiento Independiente Perú al 2000, liderado por Marco Antonio Arrunátegui, que actualmente está buscando firmas para su inscripción en las próximas elecciones nacionales.

Entre las organizaciones de pequeños confeccionistas encontramos también a algunos dirigentes que transitan por esta primera etapa en una carrera de intermediación política.

Lo que tienen en común estos dirigentes con quienes hemos denominado “vecinos interesados” en Lince es el hecho que se ubican al interior de redes reducidas donde los contactos cotidianos con su grupo de pares generan vínculos de confianza interpersonal que pueden ser reforzados por relaciones familiares, de paisanaje o vecindad. Por otro lado también tienen una cierta experiencia que les ha permitido tener contactos con instancias de decisión respecto a los problemas que afectan a los múltiples grupos de referencia por los cuales han transitado. Algunos han sido dirigentes vecinales

en sus asentamientos humanos, otros han asumido posiciones análogas en ámbitos diferentes, como Manuel Salazar, presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios de Gamarra (APEGA, que reúne un grupo de comerciantes formales) y que fue dirigente de la Asociación Túpac Amaru cuando trabajaba como ambulante. Hay quienes tienen algún conocimiento del funcionamiento de ciertas instituciones políticas que son útiles en los procesos de negociación de los intereses de sus bases con la autoridad, como el ya mencionado Felipe Dávila, quien años atrás se desempeñó como asistente de un secretario de juzgado en el Poder Judicial.

Sin embargo, la diferencia más saltante con los presidentes vecinales de Lince es que se trata de dirigentes de grupos cuyos intereses económicos comunes crean vínculos más orgánicos que aquellos que pueden construirse en una vida de un barrio residencial como Lince.

El paso a las siguientes etapas de la “carrera política” entre los actores estudiados en Gamarra implica, al igual que en Lince, una acumulación de este tipo de experiencias de intermediación que poco a poco los van vinculando con los movimientos políticos. Algunos de los empresarios del complejo económico victoriano, luego de haber alcanzado cierto éxito económico han pasado a la arena política tanto local como nacional.

40

Podemos citar a Lucio Morales, inmigrante de Puno, propietario de una tienda de telas en la Galería San Miguel que fue construida por un grupo de comerciantes del mismo departamento del sur y que en sus orígenes formaban una asociación de comerciantes informales de la Parada en la que él participaba. Morales fue regidor entre 1993 y 1995 por un grupo independiente y posteriormente reelegido en 1995 en la lista de Somos Lima.

También encontramos al ya citado Manuel Salazar de APEGA que postuló como teniente alcalde en una lista independiente en 1998 y más recientemente José Ford, empresario de Gamarra, actual teniente alcalde del distrito. Estos personajes guardan similitud con el grupo de “políticos profesionales”. Ford, por ejemplo, tiene una trayectoria municipal en Barranco y Miraflores con gente cercana al movimiento del alcalde de Lima. En su caso ha sido central para su incorporación a la lista de Somos Perú, su amistad de larga data con Jorge Bonifaz, ya que se conocen desde tiempos escolares.

Es a partir de la postulación de Olazábal al municipio de La Victoria en 1995 que un sector de empresarios poderosos en Gamarra comienzan a articular más directamente sus intereses con los actores y las instituciones políticas locales. Según varias fuentes Olazábal fue dirigente de ACOTEX (Asociación de Comerciantes Textiles) y contó con el apoyo de varios empresarios de Gamarra para su postulación como candidato por Somos Lima. Otra fuente nos contó que su candidatura fue apoyada por los hermanos Guizado, con quienes tenía una relación de confianza.

Un ejemplo de este tipo de personajes que logra transitar a las etapas superiores de la carrera política es el de Ricardo Márquez, vicepresidente de la República, propietario los Jeans Kansas, quien era dirigente de empresarios de la industria textil vinculados a Gamarra.

A semejanza de algunas personas en Lince, especialmente aquellos que tienen negocios en ese distrito, quienes han logrado un cierto nivel de éxito en su actividad en Gamarra, tienen una red de contactos y un conocimiento cotidiano de la problemática de su localidad, buscarían continuar su estrategia de movilidad social y de reconocimiento de status iniciando una carrera política. La acumulación de este tipo de experiencias es reconocida por los propios personajes y les sirve para continuar su trayectoria en la esfera política:

“Yo participé en las elecciones municipales en la lista independiente Juntos Sí Podemos que encabezaba Pelayo Urquiza. Fui invitado por el señor Urquiza para ser teniente alcalde (...) El Sr. Urquiza es dirigente de la U y yo también soy socio de ese club, de ahí es que nos conocemos. Antes nunca había participado en política, es la primera y tal vez la última vez que lo hago. *Aunque ser candidato me ha servido porque ahora hay varios partidos políticos que me están buscando en vistas al 2000*, como por ejemplo el del Castañeda Lossio y Poder al 2000 de Marco Arrunátegui, pero yo les he dicho que no”. (Manuel Salazar, presidente de APEGA)

Acá tampoco importa demasiado la identidad política o el programa del movimiento al cual se vinculan (si es que tales cosas existen), sino más bien que brindan un espacio para la realización de las aspiraciones de una carrera política: Olazábal fue candidato por Somos Lima y luego en el cargo se pasó a Cambio 90; Morales participó en la lista del Alcalde Caamaño (OBRAS) cuando fue regidor por primera vez en 1993 y luego repitió el cargo con Somos Lima y siguió a Olazábal cuando éste se pasó a Cambio 90.

Hasta el momento hemos visto algunos procesos y lógicas de cómo surgen y se articulan desde abajo hacia arriba algunos actores que sirven de intermediarios en la construcción de estrategias políticas que conectan diferentes ámbitos de la acción organizada (los relevos que mencioné más arriba). Me gustaría ahora desarrollar algunas ideas de cómo funcionan los procesos inversos de “arriba hacia abajo” en la articulación de este tipo de actores.

Los procesos de articulación de mediadores en la construcción de arreglos entre diferentes campos de acción organizada resultan centrales ya que posibilita la negociación entre ellos. Como señala Friedberg:

“La idea de sistema de acción concreto supone (...) un mínimo de conocimiento mutuo, de circulación de información (...) que permite la anticipación correcta de los comportamientos de los otros, así como un mínimo de control mutuo. Dicho de otra forma, supone una estructuración no homo-

génea, en la cual una parte importante implica *núcleos fuertemente integrados* que puedan negociar en su seno los comportamientos y las reglas que se aplicarán al sistema en su conjunto”⁴⁹

Y escribe luego:

“Todo sistema (...) dispone de sus ‘integradores’, es decir, genera actores que se encuentran en una posición de árbitros entre los intereses conflictivos de los participantes y que, reforzados por esa posición, aseguran de hecho, sino de derecho, una parte de la regulación operando los ajustes y equilibrios entre los actores (...)”⁵⁰

El sistema de partidos políticos que funcionó hasta fines de la década de los 80 constituyó una manera de canalizar la acción de los mediadores políticos, construyendo estos “núcleos fuertemente integrados” con ciertos referentes ideológicos y que en algunos casos buscaban expresar orgánicamente los intereses de determinados sectores sociales. Existe consenso en afirmar que este sistema fracasó en la representación de los intereses y expectativas de la población, en parte porque no supieron integrar las demandas de los nuevos actores sociales que surgieron en las dos últimas décadas. Frente a estos cambios, varios autores hablan de la des-institucionalización de los mecanismos de representación y participación política.

42

Las nuevas formas de articulación de los actores políticos pasan por la participación en redes que se convierten en maquinarias políticas fuertemente dependientes de la figura de un líder y que buscan incorporar algunos liderazgos locales (los procesos de “captación” descritos en Lince, que, como vimos, también funcionan en La Victoria).

En la construcción de estas redes y maquinarias políticas intervienen diferentes lógicas. Por un lado se puede recurrir a los contactos cercanos (sustentados en sistemas de confianza interpersonal y relaciones familiares) entre individuos con una trayectoria y experiencia política importante, fruto de su participación en el sistema de partidos políticos anterior. Ello sería el caso de la agrupación Somos Perú, algunos de cuyos integrantes y líderes han sido militantes de partidos como Acción Popular o el PPC, que han participado en gestiones locales con cierto grado de reconocimiento y legitimidad en la ciudadanía y la opinión pública (los “políticos profesionales”). A esto se añade la existencia de un núcleo dirigencial de confianza cercano al líder de la agrupación, que como hemos visto, tiene entre sus miembros a personas de su entorno familiar. También se pueden desarrollar acuerdos y alianzas entre otras redes similares, tales como algunos líderes vinculados a

49. Erhard Friedberg, *Le Pouvoir...*, Op. Cit., Pg. 158. Traducción propia, el subrayado es mío.

50. Ibid., Pg. 159-160.‡

experiencias municipales exitosas de Izquierda Unida en la década de los 80⁵¹ que participan ahora en Somos Perú.

Mecanismos parecidos han sido utilizados en la organización de Vamos Vecino. Se habla del grupo de los “apristas” ligados a Absalón Vásquez, uno de los principales promotores de este movimiento, quien mantiene una estrecha relación personal con el presidente Fujimori desde tiempos en que ambos trabajaban en la Universidad Nacional Agraria.

No sería de extrañar que el movimiento Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio tenga bases similares. En todo caso, un denominador común es que en el núcleo dirigencial de las nuevas maquinarias políticas, encontramos a mediadores políticos que cuentan con experiencias importantes en este campo.

A partir de estos núcleos se comienza a captar a nuevos miembros, como parte de una estrategia de hegemonía y control de los canales de mediación política. En este proceso, también pueden constituirse redes clientelistas que ofrecen a los liderazgos locales recursos para satisfacer las demandas de sus grupos de referencia. Ello resulta central cuando la agrupación que busca acumular los mecanismos de mediación política tiene los recursos suficientes para llevarlo a cabo. La estrategia municipal de Vamos Vecino es un indicador de estos fenómenos. Mediante el control de la distribución del fondo de compensación municipal entre los concejos distritales, y del resto de instituciones que implementan las políticas sociales del Estado (FONCODES, PROONA, PRONAMACH, etc.), el gobierno tiene herramientas para generar redes de este tipo. De esta forma se asignan recursos para que los liderazgos locales que aparecen tengan un cierto nivel de legitimidad al interior de sus grupos de referencia, a cambio de integrarse a la clientela de los núcleos centrales. Las disputas y cambios en la correlación de fuerza al interior de la Asociación de Municipalidades del Perú puede interpretarse como un resultado de esta lógica.

Más allá de los diferentes medios de captación de liderazgos locales, tampoco hay que dejar de lado las motivaciones que tienen estos líderes para “hacer carrera” política, que los pueden conducir a articularse con aquellas maquinarias que les den cabida, sin hacerse demasiado problema con las orientaciones programáticas o ideológicas de fondo.

Edison Nunes, en la introducción a un trabajo sobre municipios y democracia en América Latina⁵², sostiene que estos procesos de acumulación

51. Entre los miembros más notorios de Somos Perú que alguna vez estuvieron vinculados a la Izquierda Unida, encontramos a Michel Azcueta, regidor metropolitano y ex-alcalde de Villa el Salvador, Gloria Jaramillo, alcaldesa del Rímac, Arnulfo Medina, alcalde de Comas, Esther Moreno, candidata a alcaldesa en Independencia.
52. Fernando Carrión *et al.*, *Municipio y Democracia: Gobiernos locales en ciudades intermedias en América Latina*, Colección Estudios Urbanos, Ediciones Sur, Santiago de Chile, 1991.

de canales de mediación política, tienen preeminencia sobre el “horizonte ético” de la democracia y la política. Según este autor, las maquinarias políticas descuidan los aspectos programáticos y de gobierno, ya que a fin de cuentas lo más importante para ellas es reproducir los mecanismos de control político. Ello tiene consecuencias en la representatividad de las instituciones políticas como los gobiernos locales, puesto que las funciones de las administraciones municipales no se ejercen en razón de las demandas y problemas de la ciudadanía, sino en relación a su eventual inserción en procesos de acumulación o articulación política. Esta situación puede generar en la esfera pública local la exclusión de actores que no se someten a las máquinas políticas, además de obstaculizar el surgimiento de demandas de sujetos sociales autónomos o no incorporados a ellas.

En Lince la experiencia de los presidentes vecinales pudo haber servido para que los movimientos políticos “cosecharan” liderazgos locales, como efectivamente lo hicieron algunas agrupaciones, fundamentalmente de carácter distrital. Las otras de mayor envergadura, (Somos Perú o Vamos Vecino), no lo hicieron, ya que sus estrategias de captación siguieron otros caminos. En la actual administración municipal de ese distrito se ha desactivado el programa de participación ciudadana. Los motivos que algunas de las autoridades nos dieron para esta decisión tienen que ver con las funciones que los presidentes vecinales querían atribuirse (“casi querían ser como regidores”) y que cuestionaban el desempeño de las autoridades. Según nos contaron algunos informantes, Waldo Olivos no quería que las sesiones de concejo se conviertan un campo discusión permanente entre los regidores, los presidentes vecinales y el alcalde, con críticas y demandas constantes a su administración. La capacidad de incorporar nuevos liderazgos en las organizaciones existentes es limitada, no todos pueden llegar a ser alcaldes o regidores, y quienes llegan a estas posiciones, son aquellos mejor ubicados en la estructura y las redes que dan origen a estos movimientos políticos. Quienes no aceptan estas condiciones o buscan abrirse espacios por su cuenta resultan ser apartados de las instancias de decisión públicas que se controlan.

En La Victoria, dirigentes de los ambulantes se quejaron de no ser tomados en cuenta durante la campaña electoral de Somos Perú:

“Durante la campaña electoral nos visitaron candidatos. Mufarech dijo que iba a apoyar al comercio ambulatorio si era elegido, nos iba a apoyar para un paso paulatino a la formalización si salían los proyectos, incluso nos regaló bolsitas con propaganda política para envolver la mercadería que vendemos. Otros candidatos que nos visitaron fueron los de ‘Juntos Sí Podemos’ y de ‘Todos por La Victoria’. Todos ellos nos dijeron que nos iban a dar un plazo para pasar a la formalidad. Bonifaz no quiso participar en esas reuniones.” (Dirigente de la CCAACG)

Hay que recordar, sin embargo, que en este último contexto sí existen actores que pueden demostrar márgenes de autonomía importantes respecto

de las agrupaciones políticas debido al volumen de recursos, tanto de poder económico como de mediación política que ellos mismos han generado en forma independiente. Nos referimos a la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, que tuvo un rol importante en la decisión del municipio de proceder con el desalojo de los ambulantes poco después del cambio de la administración. En una entrevista con uno de sus dirigentes, éste nos manifestó:

“La coordinadora ha logrado que se dicten medidas en torno a la ropa usada, que el gobierno central renueve 14 cuadras de Gamarra, el adelanto de la gratificación por fin de año a los estatales es en parte sugerencia de Gamarra.

La marcha ha sido un hito para convertirse en un actor político protagónico con una independencia política intachable. Los contactos con el gobierno han sido diversos (se ha conversado con Joy Way, con los ministros, etc.) Un mediador importante ha sido Ricardo Márquez.

En cuanto a las elecciones municipales, con quien sea que hubiese salido nos teníamos que acomodar. Los de Somos Perú hacen las cosas que nosotros queremos que se haga. Los primeros meses del 99 serán una prueba para ver si Bonifaz merece la confianza de Gamarra.”

Estos grupos de actores más autónomos pueden constituirse en grupos de presión organizados que manejan una amplia gama de relaciones con diferentes actores políticos que compiten entre sí, por lo tanto su articulación con procesos de acumulación política se realiza dejando márgenes de maniobra importantes (incrementan su imprevisibilidad, en términos de Friedberg) que a su vez pueden reforzar su poder en la negociación de acuerdos en la esfera política.

Por otro lado, grupos cuya posición en un contexto de negociación resulta más precaria, como el caso de los ambulantes o algunos presidentes vecinales en Lince, se ven obligados a participar de relaciones más dependientes con aquellos que pueden ofrecerles recursos importantes para sus propios objetivos (tolerancia frente a la ocupación de las vías públicas o un espacio en organizaciones políticas para proseguir una carrera política). Sin embargo, a pesar de esta dependencia, las estrategias múltiples de estos actores desarrollan demuestran que se trata de una dependencia relativa, ya que están destinadas a negociar e incrementar su propio margen de autonomía.

REFLEXIONES FINALES

A lo largo del texto he resaltado la necesidad que los actores tienen de construir sus estrategias políticas haciendo uso de lógicas y recursos que provienen de ámbitos que mantienen entre sí relaciones a veces contradictorias. Es de esta manera que se construyen los órdenes locales que posibilitan

la acción social. El resultado es un arreglo, muchas veces inestable que se modifica conforme cambian las correlaciones de fuerza de los actores.

Para utilizar los recursos de estos campos heterogéneos, los actores se insertan en una serie de redes que se encuentran jerarquizadas en función de la asimétrica distribución del poder de sus miembros.

Hemos visto cómo en el caso de los empresarios y los ambulantes de Gamarra, sus diferentes activos y su participación en distintos tipos de redes configuran la utilización de determinados recursos. Los primeros tienen un acceso mayor a las altas esferas de decisión política (el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, la Comisión de Lucha Contra el Contrabando, las dirigencias de los movimientos políticos nacionales) y a los medios de comunicación (donde, por ejemplo, pueden difundir una imagen negativa de los ambulantes). Los segundos participan en las bases distritales de los movimientos políticos, lo que no necesariamente implica que sean tomados en cuenta, un ejemplo de ello fue la designación de Miguel Angel Mufarech como candidato de Vamos Vecino, impuesta por la dirigencia nacional al margen de la organización local que se estaba formando. A veces deben insertarse en redes clientelistas para obtener algún beneficio, tanto respecto de las instituciones políticas (promesas electorales de no desalojarlos) como al interior de su mismo grupo, para acceder, por ejemplo, a mejores puestos en la calle.

46

Las formas que adquieren las negociaciones y acuerdos realizadas a partir de estas redes expresan en cierta medida el carácter jerarquizado de las mismas. Para los empresarios, el reconocimiento formal de sus intereses tiene una forma más “institucional” (la ley que prohíbe la importación de ropa usada). Para los ambulantes, los acuerdos negociados con la autoridad municipal pueden tener la “forma” de un reconocimiento “institucional” (las ordenanzas de ordenamiento del comercio informal, o el pago de impuestos municipales), pero son arreglos entre ordenes y principios conflictivos (la “formalización de la informalidad”) que pueden ser puestos en cuestión más fácilmente.

En Lince vimos también cómo las diferentes redes en las cuales participan los “vecinos interesados” condicionan las diferentes etapas a las cuales pueden llegar en su carrera política, ya sea a una participación en la política en un ámbito local restringido (presidentes vecinales o miembros de movimientos políticos independientes distritales), o a una articulación con movimientos políticos más amplios que les dan una proyección provincial y los lleva a convertirse en “políticos profesionales”. Pasar de una red a otra supone a veces disponer de un activo importante de contactos personales o familiares.

Si bien entre los grupos más vulnerables como los ambulantes, especialmente aquellos con menos recursos para “reubicarse”, participar en redes jerarquizadas en forma subordinada restringe su autonomía como acto-

res políticos, la dependencia no siempre es total y pueden haber salidas. Los conflictos entre las centrales y federaciones de informales y las asociaciones menores de Gamarra son una expresión de esto último. Quienes al final apoyaron las acciones por separado de la Central Coordinadora de Asociaciones Autónomas de Comerciantes de Gamarra, eran aquellos informales que no habían logrado acumular un capital suficiente como para alquilar un local en una galería o trasladarse a puestos en otros centros comerciales de la ciudad, pero que tampoco estaban dispuestos a ser utilizados en las maniobras de las federaciones que los empujaban a la confrontación (que podía significar una pérdida importante si su mercadería era decomisada por la municipal) para retrasar el desalojo de los otros sectores de La Parada.

Al hacer un balance de las estrategias sociales y las diferencias de los activos y capital sociales de los actores, llegamos a la conclusión que la extensión del abanico de recursos que se movilizan está jerárquicamente condicionado, sin que ello deje de significar que los actores disponen de varias alternativas para transitar de un orden a otro y generar nuevos arreglos. Desarrollar esta capacidad en forma relativamente eficiente es lo que confiere legitimidad a los mediadores políticos.

Estamos frente a una imagen parecida a la que proponía Fernando Fuenzalida acerca de la estructura social peruana hasta fines de los años 60. En un trabajo publicado en 1971⁵³, afirmaba que la sociedad peruana estaba compuesta por una gama de situaciones escalonadas. Se trata de un enfoque que nos permite aproximarnos a los diferentes niveles y redes de pertenencia social, donde las posiciones sociales se definen de manera jerarquizada, pero formando parte de un conjunto más grande. A partir de ello, es posible entender el rol y la importancia de los grupos de intermediarios específicos de cada contexto particular y que aseguran la comunicación entre los diferentes niveles. En tal sentido, la sociedad peruana podría concebirse como:

“(...) una sucesión de mediadores que, escalonándose y jerarquizándose controlan ámbitos cada vez más restringidos de poder y se constituyen en filtros obligados del sistema informativo.”⁵⁴

Una peculiaridad de estas redes jerarquizadas es que expresan fenómenos de exclusión y de integración social a la vez. Esta es una tensión permanente que caracteriza el proceso de construcción de las sociedades latinoamericanas contemporáneas, tal y como lo señalaban Touraine y Figueroa y

53. Fernando Fuenzalida, “Poder, etnia y estratificación social en el Perú actual”, en: José Matos Mar *et al.*, *Perú: Hoy*, 2da edición, Siglo XXI, México, 1971.

54. Ibid. Pg. 67. Fuenzalida entiende como “información” todo objeto material o ideal susceptible de ser intercambiado. Puede tratarse del poder, las influencias, bienes económicos, servicios, etc. El “sistema de información” es entonces un sistema de intercambio de este tipo de objetos.

otros en los textos citados en la introducción. Las redes, al estar configuradas en forma jerárquica por los desequilibrios en la distribución de los recursos que confieren poder en una relación social, reproducen la exclusión de determinados grupos sociales. Sin embargo el hecho que a su vez permiten el acceso a medios importantes para la construcción de estrategias sociales y políticas, significan también una fuente de poder, una capacidad de integrarse a otros niveles mayores o en todo caso de protección para los más vulnerables. Las reglas construidas para asegurar el intercambio al interior de las mismas pueden representar las desigualdades de sus participantes, aunque también expresar procesos de movilidad social que amplían el acceso a ciertos recursos sociales, en especial aquellos producidos en una esfera pública, aquellas a las que hacían alusión Figueroa y otros cuando se referían a un nivel de redes ciudadanas y democratizadoras, producto de los procesos de construcción de Estados Nacionales modernos en la sociedad peruana.

Un problema que tiene en sus orígenes la coexistencia de los diferentes niveles y lógicas de las redes jerarquizadas a través de las cuales se desarrollan las estrategias que negocian acuerdos entre los participantes, es su capacidad para construir ordenes con un cierto nivel de institucionalización que aseguren un contexto estable donde los actores puedan controlar la imprevisibilidad inherente de cualquier proceso de negociación política. Construir reglas que al formalizarse den sustento a las instituciones sociales y políticas supone en primer lugar poder, pero a la vez legitimidad. Para que exista legitimidad, más allá que los acuerdos negociados representen distribuciones asimétricas del poder en la sociedad, es necesario que exista un mínimo de acceso a los recursos que los actores necesitan para desarrollar sus estrategias. Un orden democrático puede garantizar ese acceso, pero para ello es necesario ciertos mecanismos de re-equilibrio entre los actores que contrarresten las tendencias de los grupos más poderosos a la concentración del poder. Niveles de desigualdad social demasiado elevados hacen difícil la construcción de este tipo de mecanismos.

Un contexto así es fuente de gran incertidumbre para los proyectos de los actores sociales, puesto que los arreglos entre los diversos ordenes y las estrategias para negociarlos se vuelven inestables y poco predecibles. Pueden reforzarse entonces conductas o fenómenos de adaptación que representan la búsqueda de algún nivel de seguridad para las estrategias de los actores, como aquellas que hemos descrito utilizando el concepto de “ritualismo” prestado de Merton, o la legitimación de actitudes autoritarias desde la política que permitan imponer un orden social estable⁵⁵.

Tales fenómenos están acompañados de una profunda frustración y desconfianza de la capacidad de la acción política de generar consensos y

55. Recordemos a los empresarios formales exigiendo la intervención de las fuerzas armadas en el desalojo de ambulantes de Gamarra.

acuerdos duraderos por parte de los actores sociales. Al igual que en otros trabajos sobre el mismo tema, entre las personas entrevistadas en el trabajo de campo encontramos casi constantemente estas actitudes negativas hacia la política. Ello también puede servir como mecanismo para deslegitimar la pretensión de otros actores de disputar los canales de mediación que ya están ocupados y se intenta hegemonizar. Iniciativas que expresan conflictos o cuestionamientos al statu-quo y que quieren llevarse a la esfera política son calificadas como “politización”, negándole a este espacio su capacidad de crear acuerdos mínimamente consensuales.

Cuando la acción política pierde legitimidad, los mecanismos y actores que permiten la mediación entre los intereses sociales con las acciones provenientes de las instituciones públicas pueden comenzar a articularse de forma que se reproduzcan o generen procesos de concentración hegemónica del poder y de exclusión social.

BIBLIOGRAFÍA

- CARBONETTO, Daniel, Jenny HOYLE y Mario TUEROS. *Lima: Sector Informal*, CEDEP, Lima, 1998.
- CARRIÓN, Fernando *et. al.*. *Municipio y Democracia: Gobiernos locales en ciudades intermedias en América Latina*, Colección Estudios Urbanos, Ediciones Sur, Santiago de Chile, 1991.
- CARRILLO, Juan Carlos y David SULMONT. “¿Teoría de la anomia o anomia de la teoría?”, en: *Debates en Sociología*, No. 16, PUCP, Lima 1991.
- CROZIER, Michel y Erhard FRIEDBERG. *L'acteur et le Systeme: Les contraintes de l'action collective*, Seuil, Paris, 1977.
- COUFFIGNAL, Georges (ed.). *Réinventer la démocratie: Le défi latino-américain*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1992.
- DIETZ, Henry A. *Pobreza y participación política bajo un régimen militar*, CIUP, Universidad del Pacífico, Lima, 1986.
- FIGUEROA, Adolfo, Teófilo ALTAMIRANO y Denis SULMONT. *Exclusión social y desigualdad en el Perú*, OIT-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 1996.
- FRIEDBERG, Erhard. *Le Pouvoir et la Règle: Dynamiques de l'action organisée*, Seuil, Paris, 1993.
- FUENZALIDA, Fernando. “Poder, etnia y estratificación social en el Perú actual”, en: José Matos Mar *et. al.*, *Perú: Hoy*, 2da edición, Siglo XXI, México, 1971.
- GUERSI, Enrique. “Normatividad extra-legal en el comercio ambulatorio”, en Enri-

que Guersi (ed.), *El comercio ambulatorio en Lima Metropolitana*, Instituto Libertad y Democracia, Lima, 1989.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. *III Censo Nacional Económico*, INEI, Lima, 1994.

———. *La actividad económica en Lima Metropolitana*, INEI, Lima, 1997.

LOAEZA, Soledad. *Clases medias y política en México*, El Colegio de México, México, 1988.

MARQUES PEREIRA, Bérengère e Ilán BIZBERG (Coord.). *La citoyenneté sociale en Amérique Latine*, L'Harmattan - CELA.IS, Paris, 1995.

MATOS MAR, José. *Las barriadas de Lima 1957*, IEP, Lima, 1977.

MERTON, Robert K. *Teoría y estructura sociales*, Fondo de Cultura Económica, 2da. Ed. México, 1964.

PARKER, David. *The Idea of the Middle Class: White Collar Workers and Peruvian Society 1900-1950*, The Pennsylvania State University Press, University Park-Pennsylvania, 1998.

PONCE, Carlos Ramón. *Gamarra: formación, estructura y perspectivas*. Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1994.

PORTOCARRERO, Gonzalo (ed.). *Las clases medias*, TEMPO-SUR, Lima, 1998.

ROMERO, Catalina. "Violencia y anomia: comentarios sobre una reflexión", en: *Socialismo y Participación*, No. 39, Lima, 1987.

SALCEDO, José María. *El Jefe: de ambulante a magnate*, FIMART, Lima, 1993.

SOTO, Hernando de. *El Otro Sendero*, El Barranco, Lima, 1986.

SULMONT, David. "Ciudadanos por dentro y por fuera", en: *Cuestión de Estado*, No. 20, IDS, Lima, Abril de 1997.

TOURAINÉ, Alain. *América Latina Política y Sociedad*, Espasa Calpe, Madrid, 1989.

VILLARÁN, Fernando. *Riqueza popular: pasión y gloria de la pequeña empresa*, Congreso de La República, Lima, 1998.